

57ª REUNION — 8ª SESION EXTRAORDINARIA — ENERO 11 DE 1974

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado; del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA S. DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, Jose Antonio  
AVALOS, Pedro Isaac  
BARBORA de NASIF, Yamili  
BARONI, Danilo Luis  
BELENGUER, Emilio  
BLANCO, Rodolfo E.  
BRITOS, Oraldo Norvel  
BRIZUELA, Guillermo Ramón  
BRIZUELA, Hugo Genaro  
CACERES, Rubén Osvaldo  
CAMPORA, Pedro L.  
CANTONI, Apolo  
CARO, J. Armando  
CERRO, Francisco Eduardo  
CORNEJO LINARES, Juan Carlos  
CULASSO MATTEI, Luis  
CHAILE, Juan Carlos  
D'AGOSTINO, Lucio Roque  
DE LA RUA, Fernando  
DÍAZ BIALET, Alejandro  
ESPERANZA, Joaquín Horacio  
EVANS, Carlos H.  
FONROUGE, Alberto M.  
FRANCO, Carlos A.  
FROIS, Domingo Andrés  
GARCIA, Américo Alberto  
GARCIA, Justino  
HERRERA, Dermidio Fernando L.  
LORENZO, Ramón  
LOSADA, Mario  
LUDER, Italo A.  
LUNA, Pedro Antonio  
MANCINI, Omar A.  
MARTIARENA, José H.  
MARTÍNEZ, Julio César  
MAYA, Héctor Domingo  
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.

MOREIRA, Miguel Orlando  
MORENO, Ramón Enrique  
MURGUIA, Edgardo P. V.  
NAPOLI, Antonio Oscar  
PAZ, Eduardo Alberto  
PENNISI, Afrio  
PERETTE, Carlos H.  
PERONI, Carmelo  
POSE, Jorge Juan  
PUGLIESE, Juan Carlos  
RODRIGUEZ, Ginés Froilán  
ROMERO, Humberto Antonio  
SAADI, Vicente Leónides  
SALAS CORREA, Luis I.  
VAL, Buenaventura Justo  
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa  
VIVAS, Angel Juan Gregorio  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

ANGELOZ, Eduardo César  
BRAVO, Leopoldo  
CARNEVALE, Luis  
ELIAS, Florencio  
FRUGOLI, Amadeo Ricardo  
GRUBISICH, Pablo Eliseo  
JAUREGUI, Rafael Zenón  
LEÓN, Luis A.  
LORENZO, Jorge Luis  
SALMOIRAGHI, José César  
SAPAG, Elias  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

AUSENTES, CON LICENCIA:

BENI, Juan Carlos E.  
HERRERA, José Jorge

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados:

- I.—Decreto de la Presidencia. (Página 3132.)
  - II.—Comunicación de senador. (Página 3132.)
  - III.—Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 3133.)
  - IV.—Dictámenes de comisión. (Página 3133.)
- 2.—Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre deporte. Se aprueba con modificaciones. (Página 3133.)
  - 3.—A moción del señor senador Luder se considera sobre tablas y se aprueba el proyecto de ley sobre conflictos colectivos laborales. (Página 3160.)
  - 4.—A moción del señor senador Pennisi se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre modificación del Reglamento General de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. (Página 3161.)
  - 5.—A moción del señor senador Pennisi se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre prórroga del decreto ley 19.563/72 (subsídios familiares a trabajadores rurales). (Página 3163.)
  - 6.—A moción del señor senador Britos se considera sobre tablas y se aprueba el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social sobre modificaciones al decreto ley 18.017/68 (asignaciones familiares). (Página 3163.)

## 7.—Citación a sesión para el 24 de enero. (Pág. 3165.)

## 8.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado. (Página 3165.)

II.—Inserción. (Página 3169.)

—En Buenos Aires, a los once días del mes de enero de 1974, a la hora 12 y 21, dice el

**Sr. Presidente (Allende).** — Con la asistencia de treinta y ocho señores senadores, que constituyen quórum reglamentario, queda abierta la octava sesión extraordinaria del presente período parlamentario.

## I

## ASUNTOS ENTRADOS

**Sr. Presidente (Allende).** — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

**Sr. Secretario (Cantoni).** — (*Leyendo*):

## I

**Honores al ex senador nacional don Prudencio M. Ibarguren. — Decreto de la Presidencia**

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1973.

Ante el fallecimiento del ex senador nacional por la provincia de Buenos Aires don Prudencio M. Ibarguren, ocurrido en el día de la fecha, y siendo un deber tributarle honores por el alto cargo que desempeñara,

*El vicepresidente primero del Honorable Senado de la Nación*

## DECRETA:

Artículo 1º — La bandera nacional será izada a media asta, durante el día del sepelio, en el Palacio del Congreso.

Art. 2º — Pásese nota de condolencia a la familia, con transcripción del presente decreto.

Art. 3º — Dése cuenta oportunamente al Honorable Senado.

Art. 4º — Comuníquese.

JOSÉ ANTONIO ALLENDE.  
Aldo Hermes Cantoni

## II

**Comunicación de senador. — Avenida de circunvalación en la ciudad de Santa Fe. — Comunicación del señor senador Pennisi**

*A la señora presidenta del Honorable Senado de la Nación, doña María Estela Martínez de Perón.*

S/D.

El Poder Ejecutivo nacional ha hecho llegar al Honorable Congreso de la Nación la observación al proyecto de ley registrado bajo el número 20.553, en el cual declara de ejecución prioritaria las obras correspondientes al tramo Oeste de la avenida de circunvalación de la ciudad de Santa Fe, proyectadas por la Dirección Nacional de Vialidad.

Para ello, en el mensaje correspondiente, registrado bajo el número 393, enuncia una serie de argumentaciones técnicas que determinarían la postergación de la mencionada obra, destacando a la vez la prioridad del tramo Este de la mencionada avenida de circunvalación, incluida en el Plan Trienal 1974-1976.

Al respecto estimo que la argumentación desarrollada por el Poder Ejecutivo para fundamentar la observación mencionada no merece reparos en cuanto a la utilidad de las obras proyectadas, que relegarían a una segunda instancia la incluida en la ley 20.553. Pero es del caso señalar que dado el crecimiento del parque automotor, observado últimamente en todo el país, la ejecución de la avenida de circunvalación, tanto en el tramo Este como en el Oeste, es altamente necesaria si se quiere prever un ordenado desarrollo urbanístico, tal como lo aconseja la moderna doctrina vial, puesto que una obra de este tipo, que no puede realizarse parcialmente, conforma un anillo distribuidor del tránsito urbano, permitiendo el descongestionamiento de la urbe, a la vez que es un arma efectiva contra la contaminación ambiental, moderno mal al que no escapa nuestro acelerado proceso de urbanización. Del mismo modo, la ejecución total de la obra tiene una importancia fundamental y asu-

me la misma eficacia que la de un camino troncal, si se tiene en cuenta la necesidad de vincular el interior de la provincia con la ruta 11, hacia el Noroeste argentino, la nueva autopista Santa Fe-Rosario y la entrada al túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. De este modo se alcanzará la vinculación más rápida y necesaria de los medios de transporte, sin necesidad de internarse dentro de la misma ciudad de Santa Fe, lo que redundará en beneficio de sus habitantes y acelerará el desarrollo económico de una vasta zona agrícola e industrial de la provincia.

Cabe agregar aún una consideración de fundamental importancia respecto de la obra proyectada. La realización de la misma se constituirá en muro de contención para evitar que el desborde de las aguas asolen periódicamente a la ciudad de Santa Fe y la conviertan en el epicentro de un desastre de carácter nacional.

Por lo tanto, si la prioridad observada por el Poder Ejecutivo pudiera atribuirse a la falta de los créditos necesarios para la ejecución de la obra, el Congreso, en uso de las facultades constitucionales que le son propias, puede, en oportunidad de discutirse el proyecto de ley de presupuesto para el año 1974, votar los créditos que permitan al Poder Ejecutivo contar con los instrumentos requeridos para la construcción de dicha obra.

Es por ello que, respetuosamente, solicito del Honorable Senado sólo se tenga presente como antecedente la observación mencionada, atendiendo a los fundamentos que expongo en la presente y que, en oportunidad de estudiarse el presupuesto para el corriente año, la respectiva comisión incluya los créditos necesarios que permitan el cumplimiento de la ley 20.553.

Saludo a la señora presidenta con mi más alta y distinguida consideración.

*Afrío Pennisi.*

—A las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto y Hacienda.

### III

**Comunicación de la Honorable Cámara de Diputados.**  
— **Conflictos colectivos laborales.** — Proyecto de ley en revisión

Buenos Aires, 10 de enero de 1974.

*Señora presidenta del Honorable Senado:*

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre conflictos colectivos laborales; y ha tenido a bien aprobarlo, con la siguiente modificación:

Artículo 1º — Restablécese la vigencia del decreto ley 16.936/66, con retroactividad al 1º de enero de 1974, con las modificaciones que introduce la presente ley.

Dios guarde a la señora presidenta.

SALVADOR F. BUSACCA.  
*Ludovico Lavia.*

**Sr. Luder.** — Solicito que se reserve en Secretaría.

—Asentimiento.

### IV

#### Dictámenes de comisión

##### TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En los siguientes proyectos de ley en revisión:

Por el cual se substituye el último párrafo del artículo 16 del decreto ley 18.017/68 (asignaciones familiares).

**Sr. Pennisi.** — Solicito que se reserve en Secretaría.

—Asentimiento.

—Por el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1974 la vigencia del decreto ley 19.563/72 (suspensión de subsidios familiares a los trabajadores rurales ocupados en la cosecha del algodón).

**Sr. Pennisi.** — Solicito que se reserve en Secretaría.

—Asentimiento.

—Sobre modificación del reglamento general de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación.

**Sr. Pennisi.** — Solicito que se reserve en Secretaría.

—Asentimiento.

### 2

#### LEY DEL DEPORTE

**Sr. Presidente (Allende).** — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre deporte.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Cantoni).** — (*Leyendo*):

#### Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre deporte; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja prestéis vuestra aprobación con las siguientes modificaciones:

#### CAPÍTULO I

##### Principios generales

Artículo 1º — El Estado atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental:

- a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y como recurso para la recreación y esparcimiento de la población;
- b) La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población;

- c) El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar altos niveles de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte argentino a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país;
- d) Establecer relaciones armoniosas entre las actividades deportivas aficionadas, federadas y profesionales;
- e) Promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los deportes de todos los habitantes del país y en especial de los niños y los jóvenes, considerando a la recreación como auténtico medio de equilibrio y estabilidad social;
- f) Crear en lo nacional una estructura de administración, coordinación y apoyo al deporte; en lo provincial, concretar una armónica realización de esfuerzos tendientes al logro de tal estructura; en lo municipal apoyar la satisfacción de las necesidades que la comunidad no pueda concretar, y, en lo privado, asegurar el asesoramiento y apoyo que le sea requerido;
- g) La coordinación con los organismos públicos y privados en los programas de capacitación a todos los niveles, en las competencias y el ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al deporte.

Art. 2º — El Estado desarrollará su acción orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en el país, conforme a los planes, programas y proyectos que se elaboren.

Art. 3º — A los efectos de la promoción de las actividades deportivas conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado deberá, por intermedio de sus organismos competentes:

- a) Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los deportes en toda la población, con atención prioritaria en los padres, educadores, niños y jóvenes fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas a los casos;
- b) Promover la formación de docentes especializados en educación física y de técnicos en deporte y procurar que tanto la enseñanza como la práctica de los mismos se encuentren orientadas y conducidas por profesionales en la materia;
- c) Promover la formación de médicos especializados en medicina aplicada a la actividad deportiva, y asegurar que la salud de todos aquellos que practiquen deportes sea debidamente tutelada;
- d) Asegurar que los establecimientos educacionales posean y/o utilicen instalaciones deportivas adecuadas;
- e) Asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la práctica del deporte;
- f) Promover la formación y el mantenimiento de una infraestructura deportiva adecuada y tender hacia una utilización plena de la misma;
- g) Fomentar la intervención de deportistas en competiciones nacionales e internacionales;
- h) Promover las competiciones en las distintas especialidades deportivas;
- i) Estimular la creación de entidades dedicadas a la actividad deportiva para aficionados;

- j) Exigir que en los planes de desarrollo urbano se prevea la reserva de espacios adecuados destinados a la práctica del deporte;
- k) Velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos.

## CAPÍTULO II

### *Órgano de aplicación*

Art. 4º — Será órgano de aplicación de la presente ley el Ministerio de Bienestar Social a través de su área competente.

Art. 5º — Para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Ministerio de Bienestar Social, a través de su área competente tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Asignar y distribuir los recursos del «Fondo nacional del deporte», obtenidos de acuerdo al artículo 12, con sujeción al presupuesto anual que proponga el Consejo Nacional del Deporte, fijando las condiciones a que deberán ajustarse las instituciones deportivas para recibir subsidios, subvenciones o préstamos destinados al fomento del deporte;
- b) Aprobar el presupuesto de recursos y gastos propuesto por el Consejo Nacional del Deporte;
- c) Orientar, coordinar, programar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva del país en todas sus formas;
- d) Instituir, promover y reglamentar la realización de juegos deportivos para niños y jóvenes en todo el territorio de la Nación en coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas;
- e) Fiscalizar el destino que se dé a los recursos previstos en el artículo 12 de la presente ley;
- f) Proceder a la cancelación de préstamos, subvenciones y subsidios que acuerde, cuando no se hubiere dado cumplimiento a las condiciones previstas para su otorgamiento;
- g) Proceder, en el supuesto previsto en el inciso anterior, a la inhabilitación del beneficiario para obtener nuevos recursos por el término que se determine, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte;
- h) Establecer las pautas de selección, entrenamiento y desarrollo de las competencias, considerando su verdadero alcance dentro del desarrollo técnico de cada actividad;
- i) Aprobar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte de acuerdo a las elaboraciones que eleve el Consejo Nacional del Deporte;
- j) Asesorar a los organismos públicos y privados en los aspectos relacionados con la aplicación de esta ley y el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad deportiva que desarrollen;
- k) Asegurar los principios de la ética deportiva, haciendo partícipes de ella a las instituciones dirigentes, árbitros, deportistas, etcétera, a través de las entidades que los representen;
- l) Promover, orientar y coordinar la investigación científica y el estudio de los problemas científicos y técnicos relacionados con el deporte. Crear y auspiciar la creación de bibliotecas, hemerotecas y museos deportivos. Organizar conferencias, cursos de capacitación y exposiciones vinculadas a la materia; proponer y organizar un sistema tendiente a unificar y per-

feccionar los títulos habilitantes para el ejercicio del profesorado y especialidades afines a la materia y reglamentar la inscripción de personas que se dediquen a la enseñanza de los deportes, en coordinación con las áreas competentes;

- m) Colaborar con las autoridades educacionales competentes, para el desarrollo de las actividades deportivas;
- n) Organizar y llevar el registro nacional de instituciones deportivas, y ejercer la fiscalización prevista en el artículo 2°;
- o) Realizar el censo de instalaciones y actividades deportivas con la colaboración de organismos públicos y privados;
- p) Proponer a los organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de guardar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos;
- q) Proponer leyes, decretos, resoluciones y/o normas especiales de fomento que contemplen franquicias y/o licencias especiales a deportistas, dirigentes e instituciones deportivas;
- r) Establecer y aplicar las normas para la organización e intervención de delegaciones nacionales en competencias deportivas de carácter internacional;
- s) Establecer sanciones disciplinarias por infracciones cometidas en su actividad específica, por dirigentes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, preparadores físicos, técnicos, idóneos y cualquier otro personal vinculado al deporte *amateur* y/o profesional;
- t) Arbitrar las medidas necesarias, en coordinación con las áreas competentes, para crear y/o promover los organismos indispensables para el cumplimiento de los fines indicados en los incisos b) y c) del artículo 3°;
- u) Arbitrar las medidas necesarias para la aplicación de las normas médicas sanitarias para la práctica y competencias deportivas;
- v) Con respecto a las actividades deportivas desarrolladas por las fuerzas armadas, ejercerá la fiscalización a que se refiere el inciso e) de este artículo y coordinará la orientación de las actividades deportivas que en ellas se realicen y la ejecución de competencias internacionales de alto nivel, tendiendo a mantener el concepto de unidad en el deporte.

Art. 6° — El órgano de aplicación propondrá al Poder Ejecutivo las normas que requiera la implementación de la presente ley y su reglamentación, proponiendo la creación de los organismos indispensables para su funcionamiento.

### CAPÍTULO III

#### *Consejo Nacional del Deporte*

Art. 7° — Créase el Consejo Nacional del Deporte, que estará integrado por representantes del Ministerio de Bienestar Social, de los organismos que por la presente ley se crean y de las entidades nacionales representativas de todo el deporte *amateur* y profesional.

Art. 8° — Son funciones del consejo:

- a) Asesorar en la coordinación de las actividades deportivas en todo el territorio de la Nación y provincias adheridas;

- b) Contribuir a elaborar planes, programas y proyectos relacionados con el fomento del deporte, elevarlos a la autoridad de aplicación para su aprobación y ejecución;
- c) Asistir a las instituciones que se dediquen a la práctica y desarrollo del deporte en los aspectos técnicos, sociales y económicos y de infraestructura;
- d) Elaborar, para su posterior consideración y aprobación por parte de la autoridad de aplicación, el presupuesto anual de recursos y aplicación de los mismos provenientes del «Fondo nacional del deporte»;
- e) Aconsejar la aprobación de planes, proyectos y programas que le sean elevados para su consideración.

### CAPÍTULO IV

#### *Consejo de las Regiones*

Art. 9° — A fin de equilibrar el potencial de las distintas provincias adheridas, el deporte se organizará por regiones. A tal efecto se integrará a las mismas teniendo como base la población, el nivel deportivo, la infraestructura de los distintos estados provinciales y las vías de comunicación entre ellos, conforme lo establezca la reglamentación.

Art. 10. — Créase el Consejo de las Regiones, que estará integrado por los representantes de los organismos que cree la reglamentación de acuerdo al artículo anterior y del Consejo Nacional del Deporte, cuya misión será la de evaluar planes, proyectos y programas para la aprobación por el Consejo Nacional del Deporte.

### CAPÍTULO V

#### *Consejo de Coordinación*

Art. 11. — A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3°, inciso a), de la presente ley, créase el Consejo de Coordinación, que estará integrado por representantes de las fuerzas armadas, del Ministerio de Cultura y Educación, de la Confederación General del Trabajo y demás organismos que determine la reglamentación.

### CAPÍTULO VI

#### *«Fondo nacional del deporte»*

Art. 12. — Créase el «Fondo nacional del deporte», el que funcionará como cuenta especial en jurisdicción del Ministerio de Bienestar Social, a través de su área competente, y se integrará con los siguientes recursos:

- a) El 50 % del producto neto de las salas de entretenimientos que administre la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;
- b) Los fondos que ingresen derivados de la cuenta especial del concurso de pronósticos deportivos (Prode);
- c) Los que fije anualmente el presupuesto de la administración pública nacional;
- d) Herencias, legados y donaciones;
- e) Los reintegros e intereses de los préstamos que se acuerden conforme al régimen establecido en esta ley;
- f) El producido de las multas que se apliquen en cumplimiento de esta ley y su reglamentación;

- g) El patrimonio de las instituciones deportivas disueltas que no tuvieran otro destino previsto en sus estatutos;
- h) Cualquier otra contribución que surja de otras disposiciones creadas o a crearse.

Art. 13. — Los recursos del «Fondo nacional del deporte», se destinarán a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en general, a la capacitación de científicos, técnicos y deportistas y al fomento de competiciones deportivas de carácter nacional e internacional. Los beneficiarios podrán ser organismos oficiales o instituciones privadas, y los recursos se otorgarán en calidad de préstamos, subvenciones o subsidios de acuerdo a las pautas fijadas por el presupuesto aprobado de conformidad al artículo 5º, inciso a) de esta ley.

Art. 14. — Las personas que desempeñen cargos directivos y de fiscalización en las instituciones deportivas contraerán responsabilidad personal y solidaria por las rendiciones de cuentas de los recursos provenientes del «Fondo nacional del deporte», así como también por el cumplimiento de los fines para los cuales fueron concedidos los mismos.

Art. 15. — El régimen de asignación y distribución de los recursos previstos en los artículos precedentes queda excluido de las disposiciones del decreto ley 17.502/67.

## CAPÍTULO VII

### De las entidades deportivas

Art. 16. — A los efectos establecidos en la presente ley considéranse instituciones deportivas a las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación del deporte o de algunas de sus modalidades.

Art. 17. — Créase el Registro Nacional de Instituciones Deportivas en el que deberán inscribirse todas las instituciones indicadas en el artículo precedente. Para estas instituciones, la inscripción constituirá requisito necesario para participar en el deporte organizado amateur y profesional y gozar de los beneficios que por esta ley se le acuerden, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Art. 18. — El órgano de aplicación coordinará con los gobiernos de las provincias adheridas el régimen de funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones Deportivas en cada una de las jurisdicciones.

Art. 19. — Con relación a las instituciones deportivas, el órgano de aplicación podrá establecer los recaudos necesarios para su constitución y funcionamiento y dictar normas generales en cuanto a su régimen estatutario. Así mismo estará a su cargo la fiscalización del cumplimiento de dichas disposiciones.

Art. 20. — El órgano de aplicación podrá exigir a las instituciones deportivas, para ser beneficiarias de los recursos previstos por el «Fondo nacional del Deporte», que ofrezcan en uso sus instalaciones a deportistas no pertenecientes a ellas, conforme a convenios a celebrarse entre las partes.

Art. 21. — Las violaciones por parte de las instituciones deportivas de las disposiciones legales y/o reglamentarias serán sancionadas por el órgano de aplicación, conforme a lo que establezca la reglamentación de la presente ley.

## CAPÍTULO VIII

### Régimen de adhesión de las provincias

Art. 22. — Las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires podrán incorporarse a los objetivos y beneficios establecidos en la presente ley por vía de la adhesión.

Art. 23. — La incorporación al régimen de la presente ley dará derecho a cada provincia a integrar los organismos nacionales que se creen y a participar en la distribución de los beneficios del «Fondo nacional del deporte».

## CAPÍTULO IX

### Delitos en el deporte

Art. 24. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que, por sí o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva, o efectuare promesa remuneratoria, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma.

La misma pena se aplicará al que aceptare una dádiva o promesa remuneratoria, con los fines indicados en el párrafo anterior.

Art. 25. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrarle a un participante en una competencia deportiva, con su consentimiento o sin él, sustancias estupefacientes o estimulantes tendientes a aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento. La misma pena tendrá el participante en una competencia deportiva que se suministrarle sustancias estupefacientes o estimulantes, o consintiere su aplicación por un tercero, con el propósito indicado en el párrafo anterior.

Art. 26. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrarle estupefacientes o estimulantes a animales que intervengan en competencias, y quienes dieren su consentimiento para ello o utilizaran dichos animales, con la finalidad de aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento.

Art. 27. — A los efectos de esta ley serán de aplicación los principios generales del Código Penal.

Art. 28. — Derógase el decreto ley 18.247/69, como así mismo las leyes y decretos que se opongan a la presente.

Art. 29. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 91 del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 9 de enero de 1974.

Alejandro Díaz Bialek. — Domingo Andrés Frois. — Carlos A. Franco.

En disidencia:

Carlos H. Perette. — Fernando de la Rúa

## ANTECEDENTE

### Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1973.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a consideración de vuestra honorabilidad el adjunto pro-

yecto de ley del deporte por el cual se fijan las normas tendientes a la promoción y ordenamiento de la actividad deportiva nacional acorde con las premisas básicas de la doctrina justicialista.

El deporte tiene una característica que lo configura como impostergable para el normal desarrollo del hombre, por lo que debe ser organizado y científicamente programado para que su práctica se haga efectiva a partir de los cinco años de edad. Por ello el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva, posibilitando el acceso del pueblo a la práctica del deporte para que éste deje de ser un privilegio de pocos para pasar a ser un derecho de todos.

En el proyecto se establecen los objetivos básicos del accionar del Estado en materia deportiva, fijándose las atribuciones indispensables para su eficaz cometido.

Se crea el Consejo Nacional del Deporte, que nucleará a todas las entidades que involucradas al quehacer deportivo tiene nuestra comunidad organizada, abarcando todas las áreas de la vida nacional, siendo su misión la de centralizar todo el deporte coordinando la actividad deportiva en los distintos ámbitos y niveles, contribuyendo a la elaboración de los planes, programas y proyectos relacionados con el fomento del deporte.

El Consejo Nacional del Deporte, concebido por el acuerdo unánime de los Estados provinciales reunidos en el Primer Congreso Argentino del Deporte realizado en La Rioja, será el ente encargado de mantener la concepción centralizada de la filosofía justicialista en el deporte, en tanto que su ejecución se descentralizará en los órganos que lo integran.

El órgano de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Bienestar Social, por intermedio de su área competente —la Secretaría de Estado de Turismo y Deportes—, que contará para el logro de los objetivos propuestos con los recursos provenientes del «Fondo nacional del deporte».

Así mismo, el proyecto prevé la represión de ciertas infracciones vinculadas a la práctica deportiva que lesionan naturales principios que deben primar en el deporte.

Consecuente con la máxima doctrinaria: «Los pueblos que olvidan a su niñez renuncian a su porvenir», y siendo imprescindible posibilitar la práctica deportiva en la juventud para la formación del hombre nuevo que construya la Argentina potencia, es que se somete esta ley a consideración de vuestra honorabilidad.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN D. PERON.  
José López Rega.

#### PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

#### CAPÍTULO I

##### Principios generales

Artículo 1º—El Estado atenderá al deporte en sus diversas manifestaciones, considerando como objetivo fundamental:

- a) La utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del

hombre y como recurso para la recreación y esparcimiento de la población;

- b) La utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población;
- c) El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar altos niveles de jerarquía, asegurando que las representaciones del deporte argentino a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país;
- d) La promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los mismos a todos los habitantes del país, con atención prioritaria de los niños y de los jóvenes;
- e) La coordinación con los organismos públicos y privados en los programas de capacitación a todos los niveles, en las competencias y el ordenamiento y fiscalización de los recursos referidos al deporte.

Art. 2º—El Estado desarrollará su acción orientando, promoviendo, asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades deportivas desarrolladas en el país, conforme a los planes, programas y proyectos que se elaboren.

Art. 3º—A los efectos de la promoción de las actividades deportivas conforme con lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado deberá, por intermedio de sus organismos competentes:

- a) Asegurar la adecuada formación y preparación física, el aprendizaje de los deportes entre los niños y jóvenes, fomentando el desarrollo de prácticas y competiciones deportivas;
- b) Promover la formación de docentes especializados en educación física y de técnicos en deporte y procurar que tanto la enseñanza como la práctica de los deportes se encuentren orientadas y conducidas por técnicos capacitados en la materia;
- c) Promover la formación de médicos especializados en medicina aplicada a la actividad deportiva, y asegurar que la salud de todos aquellos que practiquen deportes sea debidamente tutelada;
- d) Asegurar que los establecimientos educacionales posean y/o utilicen instalaciones deportivas adecuadas;
- e) Otorgar prioridad al desarrollo de las actividades que permitan la práctica del deporte;
- f) Promover la formación y el mantenimiento de una infraestructura deportiva adecuada y tender hacia una utilización plena de la misma;
- g) Promover las competiciones en las distintas especialidades deportivas;
- h) Fomentar la intervención de deportistas en competiciones nacionales e internacionales;
- i) Estimular la creación de entidades dedicadas a la actividad deportiva para aficionados;
- j) Asegurar que en los planes de desarrollo urbano se prevea la reserva de espacios adecuados destinados a la práctica del deporte;
- k) Velar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos;
- l) Promover la enseñanza, práctica y participación en actividades deportivas del conscripto de los cuadros permanentes de las fuerzas armadas y de sus reservas;

- m) Fomentar y apoyar con la infraestructura deportiva de las fuerzas armadas el desarrollo de la práctica del deporte por parte de la comunidad.

## CAPÍTULO II

### Órgano de aplicación

Art. 4º—Será órgano de aplicación de la presente ley el Ministerio de Bienestar Social a través de su área competente.

Art. 5º—Para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, el Ministerio de Bienestar Social a través de su área competente tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Asignar y distribuir los recursos del «Fondo nacional del deporte», de acuerdo al artículo 16, y con sujeción a los planes, programas y proyectos que se elaboren;
- b) Orientar, coordinar, programar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva del país en todas sus formas y por cualquiera que la ejecute;
- c) Ejercer la fiscalización del destino que se dé a los recursos previstos por el artículo 16 de la presente ley;
- d) Proceder a la cancelación de los préstamos, subvenciones y subsidios que acuerde, cuando no se hubiere dado cumplimiento a las condiciones previstas para su otorgamiento;
- e) Proceder, en el supuesto previsto por el inciso anterior, a la inhabilitación del beneficiario para obtener nuevos recursos por el término de tiempo que se determine, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte;
- f) Establecer y aplicar sanciones disciplinarias por infracciones cometidas en su actividad específica, por dirigentes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, preparadores físicos, técnicos, idóneos y cualquier otro personal vinculado al deporte *amateur* y/o profesional;
- g) Aprobar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte;
- h) Asesorar a los organismos públicos e instituciones privadas en los aspectos relacionados con la aplicación de esta ley y el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad deportiva que desarrollen;
- i) Promover el estudio, investigación y enseñanza de los problemas científicos y técnicos relacionados con el deporte;
- j) Instituir, promover y reglamentar la realización de juegos deportivos para niños y jóvenes en todo el territorio de la Nación en coordinación con los organismos nacionales, provinciales, municipales e instituciones privadas.
- k) Colaborar con las autoridades educacionales competentes, para el desarrollo de las actividades deportivas;
- l) Organizar y llevar el registro nacional de instituciones deportivas, y ejercer la fiscalización prevista en el artículo 2º;
- m) Fijar las condiciones a que se deberán ajustar las instituciones para recibir subsidios, subvenciones o préstamos destinados al fomento del deporte;
- n) Realizar un censo de instalaciones y actividades deportivas con la colaboración de organismos públicos y privados;

- ñ) Proponer leyes, decretos, resoluciones y/o normas especiales de fomento que contemplen franquicias y/o licencias especiales a deportistas, dirigentes e instituciones deportivas;
- o) Proponer a los organismos correspondientes las medidas necesarias a fin de guardar por la seguridad y corrección de los espectáculos deportivos;
- p) Arbitrar las medidas necesarias para la aplicación de las normas médico-sanitarias para la práctica y competencias deportivas;
- q) Dictar y fiscalizar el cumplimiento de las normas médicas de aptitud que deberán cumplir todos aquellos que practiquen deportes;
- r) Establecer y aplicar las normas para la organización e intervención de delegaciones nacionales en competencias deportivas de carácter internacional.

Art. 6º—El órgano de aplicación propondrá al Poder Ejecutivo las normas que requiera la complementación de la presente ley y su reglamentación.

## CAPÍTULO III

### Consejo Nacional del Deporte

Art. 7º—Créase el Consejo Nacional del Deporte, que estará integrado por representantes del Ministerio de Bienestar Social, de los organismos que por la presente ley se crean y de las entidades nacionales representativas de todo el deporte *amateur* y profesional.

Art. 8º—Son funciones del consejo:

- a) Coordinar las actividades deportivas en todo el territorio de la Nación;
- b) Contribuir a elaborar los planes, programas y proyectos relacionados con el fomento del deporte, elevarlos al Ministerio de Bienestar Social para su aprobación y ejecutarlos;
- c) Coordinar la actividad deportiva desarrollada por el Ministerio de Cultura y Educación, por la Confederación General del Trabajo, por las fuerzas armadas y por todas las otras áreas que estén directa o indirectamente vinculadas al deporte para integrarlas en los planes nacionales y hacerlas participes de los beneficios de la presente ley;
- d) Asistir a las instituciones que se dediquen a la práctica y desarrollo del deporte en los aspectos técnicos, sociales, económicos y de infraestructura.

## CAPÍTULO IV

### De las regiones

Art. 9º—A los efectos de equilibrar el potencial de las distintas provincias, el deporte se organizará por regiones. Será función del Consejo Nacional del Deporte, mediante pactos y convenios con los gobiernos provinciales, integrar a las mismas en regiones, teniendo como base la población, el nivel deportivo, la infraestructura de los distintos estados provinciales y las vías de comunicación entre ellos.

Art. 10.—Cada región tendrá un comité regional cuya misión será la de elaborar planes, programas y proyectos de infraestructura deportiva y de asistencia, para su posterior tratamiento por el Consejo de las Regiones, y ejecutarlo.



Art. 11. — Créase el Consejo de las Regiones, que estará integrado por los representantes de los comités regionales y del Consejo Nacional del Deporte, y cuya misión será la de evaluar los planes, proyectos y programas elevados por los comités regionales para su aprobación por el Consejo Nacional del Deporte.

Art. 12. — Para ejecutar conforme a los planes aprobados las tareas de asistencia a las entidades deportivas, créase el Ente de Asistencia, cuya función será la de procurar la provisión de material deportivo, el traslado y alojamiento de deportistas y dirigentes, y cumplir todas las tareas de asistencia que el Consejo Nacional del Deporte le asigne.

#### CAPÍTULO V

##### *Consejo de Coordinación*

Art. 13. — A los fines del cumplimiento de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 8º de la presente ley, créase el Consejo de Coordinación que estará integrado por representantes de los organismos indicados en el citado artículo y del Consejo Nacional del Deporte.

#### CAPÍTULO VI

##### *De la reglamentación*

Art. 14. — La reglamentación de la presente ley, dispondrá el número de representantes de cada área, la forma de elección, la distribución de los cargos, y el régimen de funcionamiento de los órganos que se crean.

Art. 15. — A los fines indicados en los incisos b) y c) del artículo 3º, el Ministerio de Bienestar Social promoverá o creará los organismos pertinentes y reglamentará su funcionamiento.

#### CAPÍTULO VII

##### *Fondo Nacional del Deporte*

Art. 16. — Créase el «Fondo nacional del deporte», el que funcionará como cuenta especial en jurisdicción del Ministerio de Bienestar Social, a través de su área competente, y se integrará con los siguientes recursos:

- a) El cincuenta por ciento (50 %) del producto neto de las salas de entretenimiento que administra la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos;
- b) Los fondos que ingresen derivados de la cuenta especial del concurso de pronósticos deportivos (Prode);
- c) Los que fige anualmente en el presupuesto de la administración pública nacional;
- d) Herencias, legados, y donaciones;
- e) Contribuciones voluntarias;
- f) Los reintegros e intereses de los préstamos que se acuerden conforme al inciso a) del artículo 5º de esta ley;
- g) El producido de las multas que se apliquen en cumplimiento de esta ley y su reglamentación;
- h) El patrimonio de las instituciones deportivas disueltas que no tuviera otro destino previsto en sus estatutos;
- i) Cualquier otra contribución que surja de otras disposiciones legales creadas o a crearse.

Art. 17. — Los recursos del «Fondo nacional del deporte», se destinarán a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en general, a la capacitación de científicos, técnicos y deportistas, y al fomento de las competiciones deportivas de carácter nacional e internacional. Los beneficiarios podrán ser organismos oficiales o instituciones privadas, y los recursos se otorgarán en calidad de préstamos, subvenciones o subsidios.

Art. 18. — Las personas que desempeñen cargos directivos y la fiscalización en las instituciones deportivas, contraerán responsabilidad personal y solidaria por la rendición de cuentas de los recursos provenientes del «Fondo nacional del deporte», así como también por el cumplimiento de los fines para los cuales fueron otorgados los mismos.

Art. 19. — El régimen de asignación y distribución de los recursos previstos en los artículos precedentes quedan excluidos de las disposiciones del decreto ley 17.502/67.

#### CAPÍTULO VIII

##### *De las entidades deportivas*

Art. 20. — A los efectos establecidos en la presente ley, considéranse instituciones deportivas a las asociaciones que tengan por objeto principal la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación del deporte o de algunas de sus modalidades.

Art. 21. — Créase el Registro Nacional de Instituciones Deportivas, en el que deberán inscribirse todas las instituciones indicadas en el artículo precedente. Para estas instituciones, la inscripción constituirá requisito necesario para participar en el deporte organizado *amateur* y profesional y gozar de los beneficios que por esta ley se le acuerden, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Art. 22. — El órgano de aplicación, por intermedio del Consejo Nacional del Deporte, coordinará con los gobiernos provinciales y/o municipales el régimen de funcionamiento del Registro de Instituciones Deportivas en cada una de las jurisdicciones.

Art. 23. — Con relación a las instituciones deportivas indicadas en el artículo 20, el órgano de aplicación podrá establecer los recaudos necesarios para su constitución y funcionamiento, y dictar normas generales en cuanto a su régimen estatutario. La fiscalización del cumplimiento de dichas disposiciones será ejercida por el Consejo Nacional del Deporte.

Art. 24. — El Consejo Nacional del Deporte podrá exigir a las instituciones deportivas, para ser beneficiarias de los recursos previstos por el «Fondo nacional del deporte», que ofrezcan sus instalaciones a deportistas no pertenecientes a ellas, hasta lograr el pleno uso de las mismas, conforme a convenios a celebrarse entre dichas partes por intermedio del Consejo de Coordinación.

Art. 25. — Las violaciones por parte de las instituciones deportivas de las disposiciones legales y/o reglamentarias serán sancionadas por el órgano de aplicación, conforme a lo que establezca la reglamentación de la presente ley.

## CAPÍTULO IX

*Delitos en el deporte*

Art. 26. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que, por sí o por tercero, ofreciere o entregare una dádiva, o efectuarle promesa remuneratoria, a fin de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un participante en la misma.

La misma pena se aplicará al que aceptare una dádiva o promesa remuneratoria con los fines indicados en el párrafo anterior.

Art. 27. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrare a un participante en una competencia deportiva, con su consentimiento o sin él, sustancias estupefacientes o estimulantes tendientes a aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento. La misma pena tendrá el participante en una competencia deportiva que se suministrare sustancias estupefacientes o estimulantes, o consintiere su aplicación por un tercero, con el propósito indicado en el párrafo anterior.

Art. 28. — Será reprimido con prisión de un mes a tres años, si no resultare un delito más severamente penado, el que suministrare estupefacientes o estimulantes a animales que intervengan en competencias, y quienes dieren su consentimiento para ello o utilizaren dichos animales, con la finalidad de aumentar o disminuir anormalmente su rendimiento.

Art. 29. — Derógase el decreto ley 18.247/69, como así mismo las leyes y decretos que se opongan a la presente.

Art. 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*José López Rega.*

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: el deporte tiene un rancio abolengo, pues es universal en el tiempo y en el espacio. Desde la antigüedad remota a nuestros tiempos contemporáneos y del Oriente al Occidente, las civilizaciones y las culturas reservaron siempre un lugar al deporte. Es éste un hecho histórico verificado que no constituye, ciertamente, una mera casualidad. En efecto, si el hombre en su quehacer, en el transcurso de los tiempos, produce hechos idénticos, se concluye que en los mismos ha de hallarse la existencia de un valor substantivo.

La historia revela que el deporte es hecho reiterado de la conducta humana. Es, desde luego, un valor substantivo. Y del análisis de este hecho encontramos que su repetición se produce porque da satisfacción a exigencias fundamentales de la naturaleza humana, es decir, al hombre como tal.

En tanto es juego y lucha, faculta al ser para recrear un mundo de tensiones voluntariamente aceptadas y permite al individuo evadirse de

jerarquías impuestas en la vida cotidiana, logrando su realización por el esfuerzo.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales, senador doctor Alberto M. Fonrouge.

**Sr. Díaz Biale.** — En tanto es ocasión de movimientos y participación social, exige el control permanente de las reacciones y, en particular, de la natural agresividad, todo lo cual permite al hombre conocerse mejor y situarse adecuadamente con referencia a los demás, es decir, con relación a su mundo exterior dentro del cual actúa.

Estas son las exigencias a que hacíamos referencia, porque el hombre, compuesto de cuerpo y alma, necesita salud física para desarrollar su personalidad y liberarse de los riesgos del desequilibrio físico, psíquico y moral. En definitiva:

*mens sana in corpore sano.*

En breve síntesis haremos una referencia histórica, a partir del luminoso período en que floreció el pensamiento greco-mediterráneo, cuna misma de la cultura occidental, que es nuestra cultura, prescindiendo por esto de hacer mención al deporte en las viejas civilizaciones de la China, de la India o de Egipto.

En la antigua Grecia se originó una vasta concepción de armonía y en ella se encuadró la educación física. Para Pitágoras, señor presidente, la armonía es la ley esencial de la vida. La armonía de las partes que componen el cuerpo humano da la vida y da la salud física y espiritual. En el ejercicio físico, la escuela del filósofo encuentra el medio de integrar la personalidad moral del individuo. No en vano decía Píndaro que los dioses eran amigos de los juegos, y los Juegos Olímpicos en la llanura de la Elide fueron así la ocasión durante casi mil años de una tregua de los dioses en la que estaban unidas a las justas deportivas las artes y las ciencias.

Allí, en el estadio, pronunció Temístocles sus célebres arengas; declamaron Píndaro y Simónides sus bellísimos poemas, leyó Platón sus páginas geniales, comentó Enópides sus tablas astronómicas y Herodoto páginas de su historia.

Al triunfo de los atletas se asociaba el coro, la declamación mímica y el recitado lírico, al son de las cítaras y de las flautas.

La fiesta deportiva fue así la expresión de la personalidad humana en la necesaria búsqueda que ésta tiene del equilibrio, para que todo pudiera ser logrado en su medida y armoniosamente.

El deporte, factor importante en el desarrollo de la personalidad, estuvo siempre influido por la cambiante naturaleza de las civilizaciones. Y si la actividad deportiva fue en sus comienzos espiritual, muy pronto sufre la influencia de cada época, lo que explica la importancia adquirida por ciertos juegos en determinados

períodos. Los de velocidad y destreza en los pueblos más antiguos; los de fuerza entre los egipcios y cretenses; los juegos guerreros entre los espartanos, los educativos entre los griegos; la equitación y el combate entre los romanos; el *sport* francés en el Renacimiento; y ahora las actividades al aire libre y en medio de la naturaleza marcan indiscutiblemente su tiempo, dando para él una imagen significativa.

Puede entonces advertirse hasta qué punto el deporte es quehacer del hombre como tal y cómo el deporte es expresión de lo social.

El deporte constituye una exigencia para el hombre contemporáneo, y en cuanto exigencia de la naturaleza humana es una obligación que el Estado, rector de la vida colectiva, debe asumir sin retaceos.

En efecto, los progresos de la ciencia y de la técnica, el desarrollo de la mecanización, la concentración urbana, las condiciones de la vivienda en esta sociedad transformada por la civilización industrial, entre otros factores, hicieron decir a Pierre de Coubertin que era necesario atender el importante papel que el deporte debe desempeñar en nuestro pueblo.

En esta perspectiva es refugio seguro para preservar la integridad física y moral del hombre, frente a las amenazas de un mundo moderno. Es el antídoto contra los vicios y contra la uniformidad impuesta por las estructuras sociales y otras desviaciones de la conducta.

Por esto, en el Ensayo de la Doctrina del Deporte, redactado por el Alto Comité de Deporte de Francia, se dice que es necesario convencer a los padres, a los educadores, a los empresarios, a los jefes de las fuerzas armadas y a los poderes públicos en general, de que cada ciudadano y la sociedad misma son víctimas del peligroso descuido del deporte.

La actividad deportiva es un compromiso de todo el ser. Una disciplina de y en cada instante.

En el pueblo esa voluntad existe, pero carece de permanencia ya que otras actividades de la vida sólo le permiten, en forma transitoria o circunstancial, la práctica del mismo.

Para subsanar esta deficiencia, compete a los responsables de la formación de los niños y de la juventud tomar a su cargo la dirección de las prácticas deportivas.

En primer término, es necesario que los padres y los educadores comprendan la necesidad de que los hijos y los alumnos acepten esta disciplina como un entretenimiento preferido y conveniente para ellos.

Para lograr esta finalidad, incumbe al Estado promover el adecuado estado de conciencia en los padres y en los educadores y proveer los elementos materiales necesarios y la formación de educadores deportivos y de los profesionales dedicados a la medicina del deporte. Por esto compete también al Estado la acción per-

manente de coordinación con los empleadores y los sindicatos, responsables del aprendizaje y del joven trabajador.

En definitiva, a los padres y a los educadores, a las fuerzas armadas, a los sindicatos y a los empresarios, bajo la dirección del Estado, compete la responsabilidad de las prácticas deportivas.

Señor presidente: el deporte contemporáneo se presenta como un fenómeno social. Nadie puede ignorar que el deporte proporciona multitudinarias manifestaciones, en las que se hallan involucrados grandes intereses económicos.

La misma dimensión que estamos señalando, establece el indicador de la magnitud de las inversiones que el desarrollo del deporte requiere: grandes recursos para habilitar los terrenos deportivos, los estadios, los equipos, los conjuntos y los entrenadores, sin los cuales el protagonista del deporte no puede alcanzar los niveles más elevados de su habilidad.

La coordinación de tales intereses —descontada la necesidad del deporte como complemento indispensable en la formación integral del hombre— hace imprescindible la intervención del Estado, en su irrenunciable y legítimo deber de velar por la preservación y el fomento de la actividad cultural de los ciudadanos en cualquiera de sus manifestaciones, entre las que el deporte ocupa, evidentemente, un importante y destacado lugar.

Son innumerables las definiciones que el deporte ha merecido por parte de los estudiosos en la materia, y todas ellas contienen una cuota de verdad. En homenaje a la brevedad, vamos a referirnos al documento llamado «Manifiesto sobre el deporte», emitido por el Consejo Internacional para la Educación Física y el Deporte, como organismo internacional dependiente de la UNESCO.

Allí se caracteriza al deporte como toda actividad física con carácter de juego, que adopte forma de lucha consigo mismo o con los demás, o constituya una confrontación con los elementos naturales.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador doctor José Antonio Allende.

**Sr. Díaz Biale.** — El documento que comentamos destaca luego al juego limpio como elemento indispensable para la existencia del verdadero deporte.

Pues bien, señor presidente, el gobierno del pueblo ha asumido la responsabilidad que le ha sido delegada plenamente, y no podía estar ausente en la elaboración del proyecto de ley que hoy considera este Honorable Senado.

A través de sus disposiciones, cuyo contenido creemos haber perfeccionado y complementado, respetando la filosofía y objetivos que el Poder Ejecutivo se propone, el proyecto que hoy con-

sideramos contiene los principales fundamentos para la instrumentación de una sana orientación deportiva en el país.

Propende a una cabal integración de la juventud en el deporte y los prepara para la utilización de sus ocios en la edad adulta. Este proyecto está despojado de discriminaciones odiosas y concita al deporte a todos los individuos sin distinción de posiciones políticas, sociales o religiosas. De allí que las personas tendrán, a través de este instrumento legal, la oportunidad de realizarse deportivamente según sus preferencias, con la colaboración y el incentivo del Estado. Por ello se procura democratizar la infraestructura deportiva, a fin de que a ella tengan acceso todos los individuos vocacionalmente inclinados al deporte, y también aquéllos que no descubrieron aún sus posibilidades y virtudes.

El propósito de esta ley se complementa, además, con el objetivo del Estado de coordinar y organizar una actividad que hasta el presente se ha venido desarrollando empíricamente, sin dejar de respetar por ello las expresiones autónomas y la independencia de criterios individuales, y reconociendo como homenaje merecido lo mucho que a pesar de todo se ha logrado por aquel camino en el desarrollo de la actividad deportiva. No obstante, la actividad hasta aquí desplegada resultó insuficiente frente a los problemas que la sociedad actual plantea al hombre. Es indudable que el avance de la tecnología y el desarrollo económico le han dado mayores posibilidades de *confort*. Sin embargo, eso mismo ha generado para el individuo nuevos problemas que se traducen en peligros para su salud, especialmente para su equilibrio psíquico.

Obviamente, el deporte por sí sólo no podrá dar una solución integral a estas acechanzas que plantea el mundo moderno, pero también es cierto que puede contribuir en un grado importante a su solución. O visto de otra manera, no habrá solución integral para el hombre sin el imprescindible complemento que le concede el deporte.

Es por ello que éste se erige en una necesidad social a la que el gobierno del pueblo quiere satisfacer a través del instrumento legal que estamos considerando.

Pero si el deporte es una necesidad social, también es, como dijimos, una expresión cultural, que el gobierno justicialista quiere perfeccionar. Como lo destaca magistralmente René Maheu, secretario general de la UNESCO, el deporte y la cultura tienen un origen común: el tiempo libre. El ocio filosófico de los clásicos. Las posibilidades temporales que deja al hombre su trabajo como aspecto esencial de su vida individual.

Se debe, pues, canalizar el deporte y orientar su práctica para que se complemente con la cultura y no rivalice con ella, dada la indudable preferencia popular por el deporte. Es indispensable conceder al hombre argentino por lo me-

nos las mismas posibilidades de expresarse deportiva y culturalmente, dado que ambas son formas alternativas de dignificar su tiempo libre que, en definitiva, es su libertad.

No podemos dejar de señalar que las expresiones modernas del deporte tienen rasgos comunes con las expresiones culturales. Así como la realización artística plantea una corriente de aceptación, de simpatía, de rechazo en el consumidor o admirador de la cultura, también el espectáculo deportivo crea las corrientes de afecto o antipatía entre el deportista o el equipo y el espectador. Es por ello que el autor que citamos expresa: «el espectáculo deportivo es el verdadero teatro moderno».

Otro rasgo común consiste en que tanto el deporte como la cultura son creadores de belleza. La belleza de las artes o la belleza del cuerpo o el movimiento, según el caso, impregnado en ambos con la afirmación individual del estilo personal. Tantos rasgos comunes no pueden sino confirmar la estrecha complementariedad que existe entre la cultura y el deporte, cuando no su común naturaleza confirmada en la actuación del hombre como protagonista.

Por ello afirmamos, señor presidente, que al proponer esta normativa sobre el deporte, el gobierno del pueblo no hace sino asumir la necesaria preservación de la cultura nacional, expresada en un apoyo incondicional al deporte y a las instituciones que lo practican.

El proyecto cuya sanción aconsejamos consta de nueve capítulos y veintinueve artículos. En el capítulo I se enuncian los principios generales que han de inspirar la acción del Estado en este área, y que se concilian perfectamente. Así, lo que hemos expresado con anterioridad. Así, destacamos entre los objetivos los contenidos en los incisos a) y e) del artículo 1º, y los propósitos promocionales que señala el artículo 3º, aspectos ambos que se ven implementados a través de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Bienestar Social, el cual por medio del artículo 5º del capítulo II, cuenta con las atribuciones ejecutivas necesarias para dar cumplida satisfacción a aquéllos.

El accionar de ese organismo se verá enriquecido y acompañado por el Consejo Nacional del Deporte, creado por el capítulo III, artículo 7º, que le reconoce facultades asesoras y de consejo, recogiendo las necesidades e imperativos que plantea el interior del país en un bien entendido federalismo que no declamamos. Efectivamente, a este consejo se elevarán las requisitorias que las provincias sientan el derecho de expresar a través del consejo de regiones, que se crea por el capítulo IV, y que constituye una auténtica expresión de la voluntad libremente expresada de los estados provinciales. Estos, antes de redactarse el proyecto, el 6 de octubre del año pasado, subscribieron en la ciudad de La Rioja el Acta de Compromiso cuya inserción en el Diario de Sesiones pido, a la manera de

pacto preexistente, por el que se propició la creación de este fuero federal al que sin duda alguna se dará una auténtica representatividad.

—Asentimiento (1).

**Sr. Díaz Biale.** — Al mismo tiempo se propicia por el capítulo V de este proyecto, la creación de un consejo de coordinación. Nos adelantamos así a las posibles críticas que se puedan hacer con respecto a la burocratización del deporte. Lejos de ello, este organismo, lo mismo que los otros, pretende dar categoría legal a la participación de instituciones públicas y privadas de la Nación, como lo son las Fuerzas Armadas, la C.G.T., el Ministerio de Cultura y Educación y otras, en la coordinación de las actividades deportivas que en cada una de sus áreas desarrolla, para preservar así la unidad del deporte nacional.

El fondo nacional cuya regulación se propone a través del capítulo VI del proyecto, será el sustento financiero imprescindible para la implementación de una enérgica promoción del deporte. De acuerdo con el articulado, sus recursos provendrán principalmente de fondos obtenidos por la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos y por el Concurso de Pronósticos Deportivos, que constituyen recursos genuinos y no afectan el desenvolvimiento de otras áreas.

A su vez estos recursos tienen previsto en el proyecto un destino específico vinculado con la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas y con la asistencia del deporte en general, de acuerdo con el plan de prioridades que anualmente se fije.

Por el capítulo VII se trata el tema de las entidades deportivas, por las cuales se canalizarán principalmente los beneficios de esta ley. Se crea así el Registro Nacional de Instituciones Deportivas, en el cual todas aquellas que lo deseen podrán inscribirse, como condición para participar de sus beneficios. Necesitamos aclarar que no se pretende crear un registro que tienda al favoritismo o a la discriminación, sino que, como el propósito genérico de toda actividad registral, tiende a la publicidad y al control institucional de las entidades deportivas por parte de la autoridad de aplicación, lo que facilitará, en cada caso, el rápido análisis de su situación cuando así lo reclamen las circunstancias.

Por medio del capítulo VIII se introduce el necesario régimen de adhesión por parte de las provincias a las disposiciones de la ley cuyo proyecto estamos tratando. Queda así salvada cualquier objeción de tipo constitucional que podría deducirse al preservarse la autonomía de los Estados provinciales y respetarse su voluntad de delegación en las facultades que se han reservado originariamente. De este modo, producida

la deseada adhesión de los Estados provinciales, el ámbito de la ley se verá extendido a todo el territorio de la República.

Finalmente, señor presidente, por su último capítulo se introduce un régimen represivo especial por el que se incriminan acciones o hechos que afectan a la esencia misma del deporte y cuya consumación desvirtúa los conceptos fundamentales del juego limpio y los básicos principios de la ética deportiva. De tal gravedad son esas conductas que se ha creído indispensable sancionar penalmente su realización con el propósito de moralizar el deporte en todas sus expresiones y con relación a todos sus sujetos o protagonistas.

El capítulo contiene en su artículo 27 una necesaria remisión a los principios generales del Código Penal con una expresión que la doctrina ha considerado comprensiva también de las situaciones de encubrimiento contempladas por el capítulo 13, título 9º, del citado cuerpo legal.

Por estas razones, señor presidente, la comisión aconseja y pide a este honorable cuerpo la aprobación del proyecto de ley.

Nada más.

**Sr. de la Rúa.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente, señores senadores: la sanción de una ley que regulara el fomento y el apoyo del deporte en la República ha sido una vieja aspiración.

Por el decreto 7.154, del año 1965, el Poder Ejecutivo nacional de aquel gobierno constitucional creó una comisión especial del deporte encargada de proyectar una ley, cuya presidencia estaba a cargo del ministro del Interior. A la vez, en la Cámara de Diputados de la Nación el diputado Raúl Alfonsín presentaba un proyecto por el que se creaba un fondo nacional del deporte, con fecha 1º de septiembre de 1965, que está en la página 2739 del tomo IV del Diario de Sesiones de esa Cámara. En él se determinaba con claridad la utilización de los fondos que debían servir para el apoyo del deporte.

Pero estas iniciativas se vieron frustradas, señor presidente, porque un golpe militar avasalló las instituciones de la democracia y así vimos surgir después, poco tiempo más tarde, la llamada ley 18.247, del 10 de junio de 1969, dictada por el gobierno de facto militar, que no contenía los mismos principios ni el mismo espíritu que animaba a aquellas iniciativas, sino que trasuntaba un afán centralista de toda la actividad deportiva del país. Esta es la norma vigente en el momento actual. Esta es la norma que se trata de substituir a través del proyecto que hoy consideramos.

Pero el problema, señor presidente, es si realmente la sustituimos o no, porque la mayor parte de las disposiciones del proyecto que tratamos reproduce las normas de esta llamada ley 18.247 y tenemos el temor de que persista el sentido centralista que surge de ella.

(1) Véase el Apéndice.

Pienso que lo importante es que nosotros reafirmemos en este debate cuál debe ser el concepto y la filosofía con que el Estado debe participar en el apoyo a la actividad deportiva.

Como bien ha expresado el señor miembro informante en su erudita y brillante exposición, cumple el deporte una función educativa en la vida de los pueblos. Es, sin duda alguna, un hecho social de trascendencia significativa que tiene incluso un alto valor ético, porque acostumbra a los niños y a los jóvenes a respetar reglas de gran importancia en la vida de relación.

Por todo ello al deporte se le debe asistencia por parte del Estado pero, al mismo tiempo, nos vemos obligados a decir que no debe ser utilizado por el Estado con fines sectarios. La historia, incluso la contemporánea, nos muestra la degeneración de la utilización del deporte por parte de ciertos regímenes que lo aplicaron a fines políticos.

Aquí importa además comprender, señor presidente, que si el deporte es un hecho social vinculado fundamentalmente a la educación y que debe integrarse en un sistema educativo, es imprescindible mirar no sólo al de competición, al deporte espectáculo, sino también al deporte recreativo, y aún más ampliamente a la educación física en general, es decir, a todas aquellas actividades animadas por fines de formación, higiénicos y de esparcimiento, de acuerdo al principio de que el deporte es para todos y que todos deben tener la posibilidad de acceder a él.

Por eso la plataforma de nuestro partido, bajo el rubro «Educación física y deportes» habla de la institución de una política nacional a niveles primario, secundario y universitario a través del Ministerio de Cultura y Educación y de la universidad. Ocurre que si se habla solamente del deporte nos quedaremos a mitad de camino. El deporte es uno de los aspectos en donde se integra la educación física en general, y ya veremos las consecuencias prácticas que esto tiene en la estructura de la ley. Pienso que no ha sido la intención de los autores del proyecto excluir la educación física, pero ésta puede resultar eliminada en la asignación de fondos para su apoyo y difusión.

En la ley que consideramos está contenido el enunciado de algunos objetivos que deben perseguirse para la orientación de la actividad deportiva por parte del Estado, pero ella no alcanza, a nuestro juicio, a definir con claridad una política nacional del deporte, pese a sus enunciados y a la norma según la cual será empleado como factor educativo.

Pensamos que ello está en su espíritu, sobre todo porque del inciso e) del artículo 19, que reproduce la norma pertinente de la ley de ministerios que sancionáramos oportunamente, surge expresamente el acceso a la práctica de los deportes de todos los habitantes del país y en especial de los niños y de los jóvenes.

Mas es preciso decir que también en la orientación del deporte por parte del Estado debe actuarse evitando las formas de dependencia en la actividad deportiva donde el tráfico comercial de jugadores aleja del país a auténticos valores y donde la influencia de ciertas empresas se hace sentir negativamente muchas veces. Hemos conocido todos el caso de ese gran deportista que es Miguel Angel Brindisi, quien prefirió permanecer en su tierra integrando el equipo argentino antes que dejarse seducir por las importantes ofertas de clubes extranjeros.

Otro principio fundamental en la regulación del deporte es la necesidad de asegurar la libertad para algo que por su naturaleza debe ser esencialmente libre; libertad que debe respetar el Estado no inmiscuyéndose más allá del apoyo, la coordinación y la orientación general, y que al mismo tiempo debe proteger frente a intereses mezquinos y actitudes excluyentes. Por eso nosotros hubiésemos querido que la ley expresamente lo fijara, y que señalara que no puede haber en el deporte exclusiones ni discriminaciones por causas políticas, de raza o de religión.

Es necesario asecurar el derecho de todos los habitantes del país al acceso a las prácticas deportivas, el Estado tiene el deber de velar para que se ejercite ese derecho, coordinando esfuerzos, administrando lo que le corresponde dentro de su propio ámbito, prestando su apoyo financiero y al mismo tiempo absteniéndose de vulnerar la dinámica generación espontánea y en libertad de la conducción del deporte.

Es preciso afirmar una política de descentralización ejecutiva que satisfaga las exigencias de una real y necesaria eficacia operativa en el campo del deporte, de modo de concretar una mayor participación de las comunidades locales y refirmar en los hechos las legítimas aspiraciones de las provincias. Pensamos que esto no se logra cabalmente con el proyecto de ley en consideración, porque éste trasunta un centralismo que surge del propio mensaje con que lo acompaña el Poder Ejecutivo. Creemos que esos fines no se pueden obtener con el sistema regional instituido, para el cual se invoca un acta suscrita por representantes de los gobiernos provinciales, pero no por representantes del deporte de cada una de las provincias.

Nosotros queremos entender que pese a estas objeciones, este espíritu y esta filosofía animan en definitiva el proyecto de ley, o por lo menos animará su aplicación práctica. Pero lamentamos que no esté en su letra expresa. Es más, se habla en el mensaje de centralismo y de una conciencia política partidista en el deporte. Esperamos que esto no suceda en la práctica, señor presidente. Que los fondos se empleen para estimular la participación de todos en el deporte, y que éste no sea utilizado como instrumento político. Yo sé de las buenas intenciones y del propósito constructivo del señor subsecretario de

Deportes, doctor Vázquez, quien se prodiga recorriendo el país para alentar las prácticas deportivas, y confío en que con sentido republicano aplique el instrumento que se ha de sancionar, para permitir el acceso de todos al deporte; para que los fondos sirvan de incentivo en una práctica integrada en un sistema educativo, con el mejor sentido constructivo; para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan su posibilidad de participación, que hoy se ve dificultada por la carencia de una infraestructura adecuada, sobre todo en cuanto se refiere al deporte a nivel popular, de tipo recreativo y gimnástico.

Nosotros observamos que en el proyecto de ley en consideración lo fundamental se traduce en dos o tres aspectos principales. Una norma como la del artículo 2º contiene prácticamente toda la esencia de la ley. Allí se faculta al Estado o se establece que es su función ordenar y fiscalizar todo el deporte. Y en el artículo 5º, inciso c), se asigna a la autoridad de aplicación la facultad de orientar, coordinar, programar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva del país en todas sus formas.

Pienso que con estas normas, no hacen falta las demás, porque allí está dicho todo y también está el peligro de que quede todo centralizado.

Establece luego la creación del «Fondo nacional del deporte», al cual nos referiremos más adelante, y contiene algunas normas sobre delitos en el deporte.

Pero hay una característica esencial en el articulado de la ley, y es que una vez más, como ya hemos señalado en otros casos, se sanciona un instrumento que implica un conjunto de delegaciones, es decir, que en lugar de sancionarse una ley que cree una estructura y fije normas precisas por las cuales haya de avanzarse, se delega al órgano de aplicación —en última instancia al Poder Ejecutivo— la sanción de las normas que han de constituir el núcleo verdadero, cierto y concreto del instrumento legal. Y ello ocurre no sólo en el artículo 2º y en el artículo 5º, inciso c) que he leído, sino que también en el artículo 5º, inciso k), se faculta al órgano de aplicación a consagrar los principios de ética que han de regir al deporte, sin que la ley los enuncie, por una parte, y desconociéndose en los hechos, por la otra, las reglas de ética que integran la regulación de cada actividad deportiva, que están en los estatutos y reglamentaciones de cada una de las manifestaciones deportivas organizadas en el país.

Además, señor presidente, en el inciso s) del mismo artículo 5º se faculta a la autoridad de aplicación a establecer sanciones disciplinarias por infracciones cometidas en su actividad específica por dirigentes deportivos, deportistas, árbitros, entrenadores, preparadores físicos, técnicos, idóneos y cualquier otro personal vinculado al deporte *amateur* y/o profesional. Las sancio-

nes disciplinarias, señor presidente, corresponden por principio a las entidades rectoras de cada actividad deportiva, porque están o deben estar en el conjunto de normas reglamentarias de la organización de cada grupo deportivo reguladoras de la actividad de que se trate.

Incluso, el artículo 21 establece la posibilidad de aplicar sanciones a las entidades deportivas. Aquí se va más allá de lo que preveía la ley 18.247, porque ésta enunciaba las sanciones, en tanto que en el artículo 21 del proyecto en consideración vuelve a incurrirse en el vicio de la delegación legislativa y se establece que el órgano de aplicación fijará las sanciones en su reglamentación.

Ya la ley 18.247 enumeraba sanciones de gravedad, como la exclusión del registro de entidades deportivas, la inscripción en el cual es requisito indispensable para participar en el deporte organizado. Nosotros confiamos en que no lleguen a establecerse por vía de reglamentación sanciones de ese tipo, que pueden venir a cercenar en los hechos la libertad con que debe ser posible ejercer el deporte en nuestro país.

Pero aún siguen las delegaciones, señor presidente, en el texto de la ley. El artículo 13 establece el régimen de presupuesto y asignación de subsidios dentro del «Fondo nacional del deporte», sin implantar un sistema de control ni fijar las proporciones en que estos fondos deben atribuirse, como lo hacía, con toda claridad, por ejemplo, el proyecto del diputado Alfonsín que he recordado hace un momento y que recoge las iniciativas de la Confederación Argentina de Deportes y del Comité Olímpico Argentino.

Aún más: la ley, en el artículo 5º, inciso r), faculta a la autoridad de aplicación a establecer normas sobre la intervención en competiciones internacionales, avanzando así sobre los organismos representativos del quehacer deportivo organizado. Y aun le permite la ley a la autoridad de aplicación, mediante otra forma de delegación, establecer recaudos para el funcionamiento y estatutos de las entidades deportivas, con lo que se va sobre el Código Civil y sobre las funciones del Ministerio de Justicia a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, así como también se avanza sobre las facultades propias de cada una de las provincias en cuanto al régimen de personas jurídicas.

Y como la ley no agota la estructura todavía prevé que el órgano de aplicación puede crear otros organismos además de los ya previstos, de acuerdo a lo que establece el artículo 6º, y aun resolver cómo se integrarán las provincias, conforme al artículo 9º.

Comprendo, señor presidente, las dificultades que pueden existir para agotar en una ley del deporte toda la estructura y establecer todas las previsiones, y que muchos aspectos deben quedar diferidos al órgano de aplicación. Pero

estas cuestiones que he señalado son, a mi modo de ver, importantes y hubiera sido preciso contemplarlas en la ley.

He tenido ocasión de dialogar con funcionarios del área respectiva del Ministerio de Bienestar Social, y debo decir con toda lealtad que el pensamiento que ellos expresan es adecuado a lo que debe ser en la aplicación práctica la intervención del Estado en la orientación del deporte. Lo que lamento es que esto no se halle reflejado en la letra de la ley.

Pienso que estas normas serán utilizadas sin caer en el centralismo, cuyo peligro denunciarnos; que los fondos serán asignados de acuerdo a presupuesto estables y con un régimen de control suficiente y que las normas estatutarias que se dicten no vulnerarán los principios de la libertad de asociación, de la libertad para ejercer las prácticas deportivas. Pero, señor presidente, muchas veces las intenciones son del tiempo presente y las leyes se dictan para regir también en el futuro y el legislador debe mirar hacia ese futuro para el cual han de regir las normas que sanciona.

Por eso es que nos preocupa que la ley contenga tantas delegaciones y haya en ella omisiones como las que señalamos.

Esta ley crea una estructura para cumplir los fines que ella misma prevé; pero de esta estructura, a la que no califico de burocrática para no incluirme en los términos de la defensa a esta crítica que ha hecho el señor miembro informante, anticipándose a ella, digo simplemente que es compleja y de difícil comprensión. La ley establece que el órgano de aplicación será el Ministerio de Bienestar Social, al que se le agrega una serie de organismos que están recíprocamente integrados, interrelacionados y superpuestos, todos con funciones puramente asesoras y no ejecutivas, con lo cual llegamos a que en definitiva estos organismos tienen una utilidad apenas relativa.

Mencionaremos en primer término el Consejo Nacional del Deporte, cuya función es asesorar al Ministerio de Bienestar Social, consejo que está integrado por un representante de este ministerio, por las entidades nacionales representativas del deporte amateur y profesional, que son las verdaderamente rectoras del deporte organizado de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo y que así pasan a integrarse en un organismo asesor, además de las entidades creadas por la misma ley.

¿Cuáles son las entidades que crea esta ley? El Consejo de las Regiones y el Consejo de Coordinación. Cada uno de estos organismos enviará sus representantes al Consejo Nacional del Deporte, que asesorará al Ministerio de Bienestar Social.

También prevé la ley el Consejo de las Regiones, como se ha dicho, el que está integrado por un representante del Consejo Nacional del De-

porte y por los otros organismos a crearse en la reglamentación.

Es decir que un organismo integra al otro y ya no se sabe cuál es cuál y quién asesora a quién. Supongo que este aspecto en definitiva tendrá que resolverlo la reglamentación, pero lo que la ley está organizando es algo bastante desorganizado e inorgánico.

Está después el Consejo de Coordinación, que asesora en la coordinación que cumple el Consejo Nacional del Deporte, organismo asesor del Ministerio de Bienestar Social.

Y este Consejo de Coordinación está integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Cultura y Educación, de la CGT y de otras entidades que decida o resuelva la reglamentación.

Pienso, después de lo que he manifestado, que muchos señores senadores podrán decirme que no me he explicado bien y que resulta difícil comprender lo que yo he expuesto. Pero es que a mí realmente se me hace difícil comprender cuál es la estructura que se crea, interrelacionada de tal manera que su explicación es de absoluta complejidad.

Todos estos organismos dispuestos para asesorar al órgano de aplicación —que es el Ministerio de Bienestar Social— no tienen una jerarquía o un orden de prelación entre sí, sino que están integrados por representantes de ellos mismos; es decir que de un organismo nace el otro, con lo cual, en definitiva, se produce una suerte de duplicación para recibir o recabar opiniones en orden a cómo debe actuar el órgano de aplicación y evaluar las necesidades que se satisfarán mediante el «Fondo nacional del deporte».

Por otra parte, no queda claro en el proyecto cuáles son los organismos que integran las provincias. Porque el artículo 23 establece que «la incorporación al régimen de la presente ley dará derecho a cada provincia a integrar los organismos nacionales que se creen...». ¿Cuáles, señor presidente? ¿El Consejo Nacional del Deporte estará integrado por un representante de cada provincia, o bastará el Consejo de las Regiones, o el Consejo de Coordinación?

Además, cuando en los artículos 9º y 10 se prevé el Consejo de las Regiones, no queda claro si el mismo se integrará con un representante de cada una de las provincias.

Por fortuna, no obstante las críticas formuladas, existe la posibilidad de que al reglamentar la ley esto se estructure en un todo armónico que funcione eficazmente. Porque nosotros no queremos poner obstáculos al apoyo y al fomento del deporte, sino que deseamos que se logre una estructura ágil que permita dotar al país de los medios necesarios para que realmente todos puedan acceder a las prácticas deportivas, para que la ayuda oficial al deporte se haga efectiva sin privilegios o sin sentido de preferencia, y para que se atiendan las necesi-



dades reales, sobre todo del interior del país, pero también de la Capital Federal, porque en esta inmensa ciudad hay grandes estadios, hay muchos clubes, pero quienes quieren practicar deportes no siempre tienen la posibilidad de encontrar el ámbito adecuado para hacerlo.

En efecto, los fines de semana vemos en las plazas a los jóvenes que procuran practicar un poco de fútbol. Y ello ocurre porque no existen en esta gran ciudad canchas adecuadas para la práctica de tan popular deporte, en la cantidad que este gran conglomerado urbano necesita.

Y ese es, precisamente, el sentido que debe tener el apoyo y la ayuda al deporte: posibilitar el acceso de todos a su práctica e integrarlos en el sistema general educativo, atendiendo sobre todo a las necesidades de los niños y de los jóvenes que se forman en nuestras escuelas, colegios y universidades.

En virtud de lo expresado, señalo que cuando el artículo 13 regula los recursos del «Fondo nacional del deporte», no resulta satisfactorio que se utilice allí, simplemente, la expresión «deporte». Dicho artículo es la norma fundamental de proyecto; es el que establece a qué fines se aplicarán los recursos del «Fondo nacional del deporte»; y sólo podrán aplicarse a los fines allí establecidos y no a otros, pues en tal caso el Tribunal de Cuentas objetará la aplicación.

No obstante, pareciera que el proyecto en este artículo 13 quiere hablar del deporte con una acepción más amplia, que podría comprender, o no excluir, las actividades recreativas y las actividades gimnásticas.

Pero el artículo 13, al utilizar una expresión tan concreta y concisa refiriéndose al «deporte», nos hace temer que actividades de otro tipo, que según los hombres que saben son distintas al deporte específicamente considerado, puedan verse privadas del necesario apoyo por parte del Estado nacional a través de este «Fondo nacional del deporte».

La educación física es la expresión genérica. Dentro de la educación física, el deporte es una de sus manifestaciones, así como la gimnasia es otra. Yo no sé si la expresión «deporte» quiere tener aquí el sentido amplio o si será interpretada de una manera restringida. A nosotros nos preocupa que de esto pueda resultar una limitación, y lo digo, señor presidente, porque esto ha ocurrido en otros tiempos, ya que el apoyo solicitado para fines que no fueron considerados estrictamente deportivos fue negado en muchas circunstancias. Y esto contraría la finalidad y el sentido que —estoy seguro— anima a los propios autores del proyecto.

Por otra parte, nos parece grave que no se establezca en el artículo 13 de la ley las proporciones o los porcientos de acuerdo con los cuales se distribuirán las ingentes sumas que integran el «Fondo nacional del deporte». Recuerdo que el proyecto del diputado Alfonsín lo preveía. Aquí es necesario decir cuánto se

asignará a infraestructura, fundamentalmente; cuánto se asignará al fomento de la actividad deportiva de discapacitados; cuánto al desarrollo deportivo del interior; cuánto a la organización y manejo administrativo burocrático de los organismos que se crean. Porque aquí debería decirse, señor presidente, que los cargos en ese organismo representativo serán de carácter honorario, y que se prohíbe la utilización política de los fondos o la asignación de éstos a entidades que tengan fines de lucro.

Se procura remediar esta objeción y prevenirla mediante el régimen presupuestario que se estructura en el dictamen, de acuerdo con el cual se asignarán los fondos. Pero este presupuesto es elaborado por el Consejo Nacional del Deporte, según lo establece el artículo 8º, inciso d), que dice: «Elaborar para su posterior consideración y aprobación por parte de la autoridad de aplicación, el presupuesto anual de recursos y aplicación de los mismos provenientes del "Fondo nacional del deporte"». Es decir que, según el artículo 5º, inciso b), le corresponde a la autoridad de aplicación aprobar el presupuesto de recursos y gastos propuesto por el Consejo Nacional del Deporte. De modo que en definitiva es la propia autoridad de aplicación la que se dicta su presupuesto, y como ni la ley establece porcientos ni se crea el órgano de control, la asignación al consejo nacional de proponer el presupuesto resulta ilusoria, superflua, y no tiene más valor que el de un asesoramiento.

Pienso que éste es un aspecto que la ley no podía declinar de esta manera. Debía establecer, para orientar una política adecuada, cuáles eran los porcientos de utilización de los fondos.

Debo decir también, señor presidente, que esta ley del deporte no agota el campo de la necesaria regulación de la actividad deportiva o de la educación física, porque faltan previsiones relativas a los recursos humanos que es seguramente lo más fundamental. Falta prever en la ley normas relativas a la protección para el menor deportista, para el deportista profesional que empieza, aquel que por poner una firma en la ficha de un club queda limitado en su actividad futura y es negociado después en un tráfico de deportistas, sobre lo que no hace falta insistir porque todos comprenden de su existencia y de lo que implica.

Tampoco hay reglas sobre dirigentes deportivos, para exigir que tengan medios de vida independientes, de modo que el carácter honorario de sus cargos sea real y no se convierta en un medio de vida, como no debe ser.

No se prevén normas para el deporte de los discapacitados, y no obstante anunciarse la posibilidad de hacerlo, se omiten exigencias consagradas en la ley sobre medicina del deporte. Así mismo no se toma en cuenta, como lo hace en cambio un proyecto presentado por la mayoría de los diputados nacionales de la Unión

Cívica Radical en este período de sesiones, algo tan importante como el seguro deportivo. Y están faltando también normas que suministren las bases de un estatuto para el deportista.

Yo digo esto, señor presidente, para que comprendamos cuál es la dimensión y el alcance de esta ley. En realidad lo fundamental de ella es la creación del «Fondo nacional del deporte», que es el medio con que el Estado concurrirá para asistir y apoyar la práctica del deporte en el país. Nos encontramos con que esto, que es el núcleo de la ley, está regulado de una manera insuficiente y con lo que se puede considerar una delegación excesiva.

He observado también lo relativo al deporte organizado por regiones, como se establece —pareciera que con énfasis— en el artículo 99. Yo creo que en esto hay una buena intención, como también la hubo en la celebración de la llamada Acta de La Rioja del 6 de octubre de 1973, porque la finalidad era coordinar la actividad originada en los distintos ámbitos y niveles del quehacer deportivo. Pero como ya lo he dicho, este acta está suscrita por representantes de los gobiernos provinciales y no del deporte organizado en cada una de las provincias, de modo que tiene un valor relativo.

Pero ocurre que el acta no es seguida cabalmente por el proyecto en consideración, ya que en ella el Consejo Nacional del Deporte era un organismo con funciones ejecutivas, pues debía elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos, mientras en esta iniciativa pasa a ser un organismo puramente asesor y no ejecutor.

Además, pienso que la división en regiones no responde al verdadero sentido del federalismo. Aquí debemos considerar que cada provincia tiene sus necesidades y sus anhelos en materia deportiva, y que la división en regiones puede significar que a algunas provincias se les retaceen legítimas aspiraciones. Creo que la comisión ha hecho un útil aporte al proyecto del Poder Ejecutivo al establecer que las provincias deben adherirse, si así lo desean, a esta ley, y que no sean compulsivamente incorporadas a su sistema y a sus organismos. Pero hay un resultado que no me parece justo: pienso que no hay razón para obligar a las provincias a adherirse a un sistema determinado para poder recibir fondos de asistencia al deporte, los cuales deben servir para promover y apoyar el deporte en todo el país.

Yo haría una pregunta, frente al texto a sancionarse: si una institución provincial puede recibir apoyo financiero de este Fondo Nacional del Deporte, aunque no se haya producido la adhesión de la provincia al sistema de esta ley. Pienso que no puede ser así; que no será ésa la interpretación que en la práctica se dé. Estoy seguro de que lo que se procura es el apoyo al deporte en todas sus manifestaciones, y que ese apoyo no debe depender de cuestiones formales.

La ley contiene un capítulo relativo a las entidades deportivas, pero omite en él toda referencia a las federaciones y confederaciones, situaciones que sería conveniente regular. Y, lo que es grave, prevé la exigencia de un registro condicionante para ejercer la actividad deportiva; no sólo para recibir subsidios, señor presidente, sino para ejercer su actividad. Es lo que ya disponía el artículo 20 de la ley 18.247, que aquí se reitera ahora cuando se dice: «la inscripción constituirá requisito necesario para participar en el deporte organizado *amateur* y profesional». Si se dijese que esta inscripción es requisito para recibir los fondos de apoyo y ayuda, estaría de acuerdo; si se explicase que esto tiene por objeto hacer un censo y una evaluación adecuada de las organizaciones deportivas existentes en el país y de la infraestructura de que disponemos, también lo estaría; pero cuando este artículo 17 repite aquella norma de la ley 18.247, según la cual la inscripción constituye un requisito para participar en el deporte organizado, y cuando sin decirlo se deja flotando la posibilidad de que a título de sanción se excluya a una entidad deportiva de este registro, nos encontramos con que por vía de esta ley estamos creando la posibilidad de que se prive de la libertad del ejercicio de la actividad deportiva y de que esto pueda ocurrir respecto de instituciones provinciales que no tienen por qué estar compelidas ni sometidas a este centralismo que crea el artículo 17.

Además, se faculta al órgano de aplicación para dictar nada menos que las normas estatutarias que deben regir la vida de las asociaciones deportivas, que son personas jurídicas en nuestro derecho, y los requisitos de su existencia y funcionamiento debe establecerlos la ley. Esto no puede delegarse, no digo ya en el Poder Ejecutivo, menos aún en el órgano de aplicación, que es un ministerio del Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la realidad deportiva que se expresa en su máximo nivel a través de la Confederación Argentina de Deportes y el Comité Olímpico no se recoge en su plenitud, pues estos organismos pasan a integrar otros órganos asesores, no obstante ser los entes rectores del deporte aficionado organizado.

Yo estoy seguro, señor presidente, de que la intención de los autores del proyecto no es avasallar la libertad del ejercicio del deporte para avanzar sobre las entidades deportivas. Estoy convencido de que se quiere preservar su autonomía. Es más: lo he oído de boca de funcionarios del Ministerio de Bienestar Social que han trabajado en el proyecto. Pienso que el afán no quiere ser centralista, sino todo lo contrario, y que se desea fomentar la práctica del deporte, porque no comprendería un espíritu distinto. Pero creo, señor presidente, que podríamos decirlo en la letra expresa de la ley consagrando el principio de que el Estado reconocerá la autonomía de las entidades deportivas existentes y a crearse.

Esto no puede omitirse en el texto de una ley que procura el fomento del deporte y el reconocimiento del derecho de practicarlo a todos los habitantes de la Nación.

Deseo hacer aquí una breve digresión porque me preocupa que estemos considerando una ley nacional del deporte, y hablando de las entidades deportivas y del apoyo al deporte justamente cuando subsisten en el país situaciones irregulares en muchas asociaciones deportivas que permanecen intervenidas a través del tiempo. Cito —para dar un ejemplo, por ser el más notorio dado el carácter popular del deporte que rige— el caso que todavía subsiste en la Asociación del Fútbol Argentino. El 29 de agosto de 1973 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por unanimidad una declaración para que concluya la intervención a la Asociación del Fútbol Argentino y se la normalice. El señor diputado Sobrino Aranda, que pertenece al sector de la mayoría, introdujo un agregado en la declaración que tiene un gran valor, en el sentido de que se prevea la integración del Consejo Federal con representantes del fútbol del interior que tengan domicilio real en las provincias. Varios diputados nacionales en reportajes periodísticos han señalado la gravedad del hecho de que persista la intervención en la Asociación del Fútbol Argentino. Y acá no hay sectores, señor presidente, porque coincidieron en el problema los diputados Marino, Rabanal, D'Angelo, Insúa, Tróccoli, Sobrino Aranda y Nicoliche, todos de distintos sectores, señalando la necesidad de que se ponga término a esa intervención.

Desde el año 1966 el fútbol argentino vive con su entidad rectora intervenida y, lejos de hablarse del cese de dicha intervención, pareciera que todo hace prever que la misma ha de continuar porque hasta se contrata al técnico para el seleccionado de fútbol que ha de participar en el campeonato mundial a celebrarse en Munich. A propósito, sería deseable que fuéramos a ese compromiso con la entidad rectora del fútbol organizada, normalizada, habiendo cesado la intervención.

Ocurrieron cosas en la Asociación del Fútbol Argentino. Hay preocupación en los sectores vinculados a este deporte. No hace muchos días su tesorero, el señor Pedro Candia, renunció, y su renuncia plantea serios problemas, serias preocupaciones, porque habla de que el estatuto preparado por la actual intervención configura lisa y llanamente la normalización de la intervención, no la normalización de la institución. Y yo debo decir, señor presidente, que me preocupa el hecho de que, mientras estamos debatiendo y sancionando la ley del deporte, no se hayan adoptado las medidas para la inmediata normalización de esta fundamental institución. Es necesario restituir a los clubes, con la debida participación del deporte del interior, el poder de dirigir su propia actividad como una afirmación de esa autonomía de las instituciones que queremos reconocer.

No es posible pensar que los dirigentes del fútbol, entre los cuales se cuentan hombres de inolvidable memoria, como José Amalfitani, quieran otra cosa que no sea el bien del deporte; y no se puede decir que esto haya de lograrse manteniendo una intervención que debe cesar.

Señor presidente: esta ley es muy amplia, pero su esencia se resume en algunas pocas normas, y pienso que he señalado las principales. En su mayor parte pudo ser objeto de un decreto reglamentario de la ley de ministerios. Creo que la ley no solucionará por sí sola el problema del deporte. No lo creará, en primer lugar, porque ya existe como manifestación espontánea de la actividad de muchos argentinos. Tampoco lo cercenará, porque lo que es libre y espontáneo no muere ni cesa por acción de normas reglamentarias. Por eso pongo mi confianza más que en la ley que se va a sancionar en la buena acción que pueda cumplir, de acuerdo a sus nobles intenciones, el subsecretario de Deportes, quien estoy seguro está animado de los más sanos propósitos.

Pienso que esta ley no aporta soluciones decisivas, y sólo la acción real, con sentido social, espíritu republicano y vocación federalista puede resultar útil para que veamos un auténtico desarrollo de la educación física y del deporte en el país. Por ello, es preciso comenzar por normalizar las instituciones intervenidas, las asociaciones, como la del Fútbol Argentino y otras federaciones.

Que no se utilice esta ley como un instrumento de centralismo político, sino como un medio de dar apoyo a una efectiva descentralización que exprese la libertad en la actividad deportiva. El señor miembro informante recordó con razón a los griegos. Ellos hicieron un culto del deporte y establecieron las olimpiadas en la Elide, en el año 776 antes de Cristo, en honor a sus dioses. Licurgo, el gran legislador griego, ordenó una tregua sagrada para el tiempo de los Juegos Olímpicos; los artículos de esa ley están en el «Disco del tiempo», de Pausanias, llamado «Disco de Ifisos», a quien se atribuye la institución de los Juegos Olímpicos. Durante ese período, que venía a alcanzar un mes de cada año, las fuerzas de combatientes griegos en contraste se abstienen de combatir. El deporte afirmaba así, junto a los valores éticos propios que él expresa, un sentido de paz entre los pueblos.

Para concluir con esta exposición, señor presidente, quiero hacer votos para que la acción del gobierno en el campo del deporte sirva para reafirmar la vocación de paz entre los argentinos, del mismo modo que la imponía en aquellos lejanos tiempos entre los pueblos de la Grecia antigua. (*¡Muy bien!*)

**Sr. Fonrouge.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Fonrouge.** — Señor presidente: es interesante advertir la preocupación de los señores

senadores preopinantes por señalar que esta legislación debe tener presente el respeto que el federalismo nos impone institucionalmente. Entiendo que no invade en manera alguna el derecho de los Estados provinciales sobre el particular, desde que la presencia nacional en la tarea de cuidar la salud física de sus respectivas poblaciones, en todo caso, implicaría un beneficio en favor de los legítimos intereses locales.

He creído necesario puntualizar brevemente este aspecto, porque cada vez que se tratan normas que tienen una proyección nacional se presume una lesión al derecho federal. Soy como el que más en este cuerpo, y sobre todo representando a la provincia de Buenos Aires, un celoso guardián listo para evitar que se allanen los fueros provinciales, salvo en aquellos casos en que realmente es el Estado local el que al caer enfermo institucionalmente, por no responder a los propósitos para los que se lo ha creado, pueda afectar a la República.

El deporte es uno de los tantos asuntos que no pudieron estar presentes en el genio de los Constituyentes del 53, porque no era en esa época un problema que pudiera angustiar las vigiliias deliberantes de aquellos argentinos. Recuerdo que Sarmiento en la convención ad hoc de Buenos Aires, en 1860, fue uno de los que dejaron sentada la gran tesis en defensa del federalismo. Hay asuntos que exceden —no obstante ser cuestión privativa de la legislación local— a los más estrictos escrúpulos federalistas, porque sin atacar poderes reservados se descuentan implícitamente delegados en razón de su alta finalidad general.

Quería señalar así, aunque al pasar, señor presidente, que estas ideas, aunque deshilvanadas, intentan que no quede en el ánimo de nadie la preocupación de que con una ley de este tipo y en esta materia estamos incurriendo en herejías constitucionales.

**Sr. Díaz Biale.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: el señor senador de la Rúa, en representación del bloque de la Unión Cívica Radical, se muestra quejoso y un tanto preocupado por cuanto en la ley no existe una norma que establezca que la misma no será utilizada con fines políticos o discriminatorios.

Hemos dicho que pretendemos una cabal integración de la juventud y que esta ley está despojada de discriminaciones odiosas, que no hace distinción alguna de posiciones políticas, sociales o religiosas.

Pero, si lo afirmado por nosotros no fuera suficiente, basta leer el articulado de la ley para concluir que ninguna de sus normas puede ser interpretada como dirigida a una utilización política o a una discriminación religiosa o de otra naturaleza.

En cuanto a los propósitos fundamentales de la ley, con respecto a los cuales también ha manifestado el señor senador de la Rúa...

**Sr. de la Rúa.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Díaz Biale.** — Con mucho gusto.

**Sr. de la Rúa.** — Temo haber sido mal interpretado por el señor senador. Yo he dicho, efectivamente, que el deporte no debe utilizarse con fines de discriminación política. Pero he manifestado que no debe haber discriminación política, racial o religiosa en el plano general. Considero que no sólo no debe haber discriminación en las instituciones deportivas y en la actividad del Estado, sino que además en el plano deportivo debe existir una norma general que prevea que esa discriminación no debe existir. Esta es una norma establecida en las reglas deportivas internacionales y también en muchas entidades nacionales, y yo he dicho que hubiera querido verla consagrada expresamente en el texto de la ley.

De manera que no estaba haciendo una imputación, sino que, antes bien, he expresado que confío que ese espíritu de aplicarla con sentido de posibilitar el acceso al deporte a todos y sin discriminación de nadie, se concrete en la práctica.

Quería formular esta aclaración para evitarle al señor senador la fatiga de una réplica más prolongada.

**Sr. Díaz Biale.** — Las palabras del señor senador están ratificadas por los incisos a) y b) del artículo 1º, que se refieren a la utilización del deporte como factor educativo coadyuvante a la formación integral del hombre y a la utilización del deporte como factor de la salud física y moral de la población, y por el inciso a) del artículo 3º, que establece claramente que el propósito de la ley es asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los deportes en toda la población, con atención prioritaria en los padres, educadores, niños y jóvenes fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas.

Creo que con esas tres normas que he citado queda suficientemente aclarado el punto.

En cuanto a las observaciones sobre el centralismo, creo necesario establecer que resulta conveniente que el deporte tenga una orientación nacional. Pero no se está buscando el centralismo porque, casualmente, se crean dos organismos que han sido criticados pero que tienden a evitarlo: el Consejo de Coordinación y el Consejo de Regiones. En el primero van a estar representadas las fuerzas armadas, el Ministerio de Cultura y Educación y los otros organismos deportivos con trascendencia en el orden nacional. En cuanto al Consejo de Regiones creemos tener un gran respeto a las autonomías provinciales y las regiones no son una creación nuestra, las regiones nacen con la historia misma del país. No podemos ignorar que exis-

te Cuyo, las provincias del Norte, las provincias del centro y las de la Mesopotamia, y cada una de ellas, a través de sus organismos respectivos, podrá traer al Consejo Nacional del Deporte sus preocupaciones y sus necesidades.

En cuanto a las observaciones sobre el registro de entidades deportivas, no creo que correspondan, y ya me anticipé a decirlo. Este registro no tiene otro propósito que una finalidad orgánica; ¿cómo la autoridad de aplicación va a distribuir los fondos y ejercitar su autoridad, si no tiene un registro nacional? Por otra parte, esto presta seriedad a la ley, porque evita la fácil aventura de hacer aparecer como un organismo estable lo que no es más que una creación circunstancial para gozar de beneficios que no son merecidos.

Respecto de las observaciones sobre sanciones disciplinarias, las mismas se fundan en el supuesto de un ejercicio arbitrario de la autoridad. Nosotros partimos de un supuesto distinto, o sea del que los funcionarios del gobierno del pueblo han de ejercer su autoridad con prudente arbitrio y en modo alguno han de caer en excesos que perjudiquen lo que es preocupación fundamental precisamente de nuestro gobierno, que es fomentar la actividad deportiva, por las razones que he expresado en el informe que he dado.

Con referencia a los conflictos existentes en las asociaciones o federaciones, me parece que resulta obvio que este tema no puede ser materia de la ley, sino de resoluciones que se adoptarán oportunamente.

Finalmente, el que no se incluyan porcentajes en el presupuesto que se crea por el artículo 12 me parece que es una observación que no se conforma con la realidad, por cuanto los porcentajes, evidentemente, obedecen a circunstancias, y es notorio que establecer un porcentaje determinado para la construcción de estadios, por ejemplo, puede no resultar conveniente, porque en determinadas circunstancias no sea necesario hacerlo; esto también queda librado al criterio prudente de la autoridad que corresponda.

Por último, la crítica que se ha hecho a la delegación de facultades por la vía reglamentaria, la comisión no la encuentra justificada, porque el propio señor senador de la Rúa ha expresado que en esta ley muchos de sus artículos debían ser dejados para la reglamentación, y es evidente que no se hace una fácil delegación, sino que obedeciendo a cuestiones circunstanciales no puede preverse, en una ley que no contiene normas generales, lo que será después motivo de la preocupación del Consejo de las Regiones y del Consejo de Coordinación.

Por estos fundamentos, señor presidente, solicito nuevamente al honorable cuerpo preste su aprobación al proyecto de ley en consideración.

Nada más.

**Sr. Brizuela (G. R.).** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Brizuela (G. R.).** — Señor presidente, señores senadores: el proyecto en tratamiento, en nuestra opinión, es parcialmente absorbente y centralizador.

Se entiende que la educación corresponde en primer lugar a los padres, y éstos la delegan en el Estado. En consecuencia, mal puede el Estado arrogarse el papel de único educador.

El deporte es una forma de la educación física, y la educación, se ha convenido, no es monopolio del Estado. Lo que pretende el Poder Ejecutivo mediante este proyecto es monopolizar el deporte, ordenar, controlar, fiscalizar toda actividad deportiva que se realice en el país.

Lo fundamenta en la necesidad de dar organicidad a la práctica de los deportes. Pero ello sólo se logra si se obliga a toda entidad vinculada con el deporte a contratar personal especializado: profesores de educación física, auxiliados por instructores y entrenadores de cada deporte.

Es a cargo de esos profesionales, que el Estado a través de sus órganos de educación prepara y forma, lo que puede dar organicidad, no sólo a la práctica del deporte —de por sí útil— sino a todo tipo de actividad física.

De allí la obligación del Estado, que este proyecto afortunadamente contempla, de promover la formación de docentes especializados en educación física y de médicos especializados en la medicina aplicada a la actividad deportiva.

La función del Estado debe ser solamente la de promover las actividades físicas y deportivas, para lo cual debe proveer la creación de la infraestructura necesaria, estimular competencias, elaborar programas, planes, proyectos, asesorar, etcétera. Y esto también lo contempla el proyecto.

Pero donde se sale del cauce democrático es cuando pretende «ordenar y fiscalizar la actividad deportiva del país en todas sus formas y por cualquiera que la ejecutare». Para ello crea una inmensa burocracia: un Consejo Nacional del Deporte; un Ente de asistencia; un Consejo de las Regiones; un Consejo de Coordinación y comités regionales, todos ellos dependiendo de la Secretaría de Estado de Turismo y Deportes, órgano del Ministerio de Bienestar Social.

Y esa burocracia absorberá a todas las entidades deportivas, pues ordenará su actividad; incluso se inmiscuirá en el deporte de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones. Mejor sería que en las escuelas y en los colegios se aumenten las horas que se dedican a la enseñanza de actividades físicas, dejando la enseñanza dentro de la órbita que le corresponde: el Ministerio de Educación y no el Ministerio de Bienestar Social, sin perjuicio de la labor de asistencia, promoción y planificación que éste pueda aportar. En efecto, esa labor podría ser, por ejemplo, la construcción y mantenimiento de centros de educación física para que concurran a ellos to-

dos aquellos que no pueden asistir a los clubes privados; allí podrán promoverse competencias, etcétera.

Toda esa burocracia, todo ese contralor y planificación, se logra utilizando ingentes recursos provenientes del Prode, de los casinos, etcétera, los que integran un Fondo Nacional del Deporte, que el Ministerio de Bienestar Social repartirá de acuerdo con su criterio, para lo cual exigirá que se sometan a sus reglas todas las entidades que quieran subsidios.

Con ese dinero, bien repartido entre el Consejo Nacional de Educación, las provincias, los clubes y demás entidades se pueden lograr los mismos fines, sin sacrificio de la libertad de acción, y tampoco se afectará el federalismo.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador doctor Américo Alberto García.

**Sr. Brizuela (G. R.).** — Ese dinero que puede destinarse a la creación de infraestructura, a la práctica de actividades físicas, a la preparación de profesionales, será repartido conforme al criterio del Ministerio de Bienestar Social, puesto que todo ello está sometido a la reglamentación del Poder Ejecutivo. De ese modo, se somete a todas las entidades deportivas a su poder, ordenando su inscripción en un registro especial. Es decir, que un club de barrio no podrá jugar un partido de fútbol con otro sin estar inscrito y además autorizado.

La constitución de clubes, su funcionamiento y sus estatutos estarán determinados por el Poder Ejecutivo. Y yo me pregunto: ¿dónde está entonces el derecho de asociarse con fines útiles, que consagra el artículo 14 de la Constitución Nacional? La última de las imposiciones es la creación del delito deportivo, lo que se sanciona con prisión. Entiendo que el bien jurídico que protegen estas normas, señor presidente, no es otro que la ética deportiva. La violación de normas de ética nunca puede constituir un acto tan grave para la sociedad y para el Estado como para que se aprisione al infractor. Corresponderá un juicio, también de carácter ético, a cargo de pares de su profesión o actividad. Todo esto, dicho, señor presidente, aparte de los casos en que una violación a la ética también signifique la comisión de un delito. Allí sí intervendrá la justicia. Nada más.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (García, A. A.).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — Señor presidente: me siento imposibilitado de poder emitir una opinión definitiva sobre un tema de tanta trascendencia y de tanta importancia, pero no puedo dejar pasar esta circunstancia sin fijar la posición de mi voto con respecto al proyecto.

Recién en el día de ayer por la tarde he tenido en mi poder el despacho firmado por la comisión. Un tema de tanta trascendencia como el que nos ocupa, referido sobre todo a la

promoción de la salud física, especialmente de la juventud, creo que debe ser bien analizado y cotejado, y establecer paralelos con la ley que anteriormente regía esta materia y, de acuerdo con lo que he podido leer, este proyecto en buena medida es copia de la ley 18.247, dictada en el año 1969.

El proyecto dispone de ingentes sumas de dinero provenientes de la lotería y del Prode, lo que me hace pensar que debe ser objeto de un estudio meditado y preciso para poder dar una opinión definitiva. De su ligera lectura, he comprobado que es una ley totalmente centralizadora, y constituye un avance en contra del federalismo, puesto que —a mi criterio— establece una injerencia del Estado que no apunta en realidad a los fines específicos de un tema como éste.

Después de haber escuchado la palabra de los señores senadores preopinantes, por las que he podido apreciar que conocen la materia por haberla estudiado conscientemente, mi posición en este debate se verá reflejada en mi voto negativo a esta iniciativa.

Nada más, señor presidente.

**Sr. Díaz Biale.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (García, A. A.).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: el señor senador Brizuela ha dicho que esta ley configura la intromisión de las autoridades de aplicación en las fuerzas armadas. Sobre el particular diré solamente dos palabras, ya que fue preocupación de la comisión tener en cuenta que el entrenamiento físico y el deporte en las fuerzas armadas constituyen una parte de la instrucción militar que prepara al personal física y anímicamente para el combate. Por eso, el inciso v) del artículo 5º dice: «Con respecto a las actividades deportivas desarrolladas por las fuerzas armadas, ejercerá —la autoridad de aplicación— la fiscalización a que se refiere el inciso e)». Es decir, que se refiere simple y exclusivamente a la fiscalización del destino de fondos que se den. En lo demás, y de conformidad con el Ministerio de Defensa, simplemente se establece una coordinación, por cuanto el hombre que se incorpora a las filas debe continuar su actividad deportiva con posterioridad a su egreso de las mismas.

En cuanto a lo que expresa el señor senador por Santa Fe, debo decir simplemente que este proyecto tiene cerca de dos meses de trámite en el Honorable Senado.

**Sr. Zarriello.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (García, A. A.).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. Zarriello.** — Señor presidente: todos coincidimos en que el país necesita una ley nacional que ordene, desarrolle y promueva en todos los niveles el deporte, como bien dijo el señor senador Díaz Biale; una ley que asista económica y socialmente, y que capacite a los deportistas con la mejor tecnología, para permitirles

exponer ante el mundo la calidad física y moral de nuestro pueblo; una ley que en el orden interno procure la unidad nacional, configure su espíritu y desarrolle una sociedad plena de realizaciones y objetivos, favorecidos en su consecución por la acción generada en el pueblo por la práctica de los deportes.

Todos coincidimos, repito, en que el país reclama una ley nacional del deporte. Por eso es plausible la amplia discusión que hoy se realiza en este recinto del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo nacional sobre la materia.

Es también, sin duda, una expresión de sana política de gobierno promover el desarrollo integral del deporte nacional. Nuestra coincidencia de propósitos es absoluta. Sin embargo, y no obstante las modificaciones propuestas por la Comisión de Legislación General para corregir y mejorar el texto primitivo, en mi concepto ellas no alcanzan a producir el resultado que estimo necesario a fin de lograr para el país una ley que satisfaga plenamente los objetivos que se procuran, sin que en ningún momento se comprometa o posibilite que su aplicación afecte principios de la estructuración filosófica de la vida argentina, o se comprometan objetivos muy caros al sentimiento, al espíritu de justicia y de respeto por los derechos de todos los ciudadanos argentinos, cualquiera sea el credo político o la voluntad de someterlo a un molde partidista determinado.

No creo, señores senadores, que en ningún momento haya estado en el espíritu ni en la intención de nadie provocar una situación como la señalada. Me refiero a los valores que hacen a la vida argentina, al sentimiento democrático y a la estructura republicana de nuestra organización política, que pretendo ver total y absolutamente protegida, sin riesgo alguno de avasallamiento o de imposiciones por vía de un excesivo centralismo, al que con tanta elocuencia se ha referido mi compañero de sector, el señor senador de la Rúa, de un centralismo autoritarista y reglamentario, diría yo, en función de las facultades que el proyecto que analizamos acuerda al poder administrador o a esta nueva estructura, y de las disposiciones que establecen el régimen de apoyo financiero, estructural y de participación.

No solamente me preocupa, señor presidente, el importantísimo aspecto señalado. También me preocupa la vida autónoma, la libertad de acción, la determinación de propósitos, las metas alcanzadas tras muy largos y penosos años de trabajo por pioneros y esforzados grupos humanos preocupados por el deporte nacional, aquellos que no escatimaron sacrificios de toda índole para crear la actual estructura del deporte nacional, que hoy muestran orgullosas nuestras instituciones rectoras, clubes, federaciones, confederaciones, etcétera. Estas instituciones necesitan todo el apoyo que una sociedad solidaria y organizada les puede proporcionar para dar sus mejores frutos, y no verse some-

tidas a dictados de superorganismos o de grupos de dirigentes no siempre dotados de condiciones técnicas para imponer criterios, y a veces sometidos a un interés partidista que reclama para sí todos los triunfos por creerse los únicos dueños de la virtud, que es negada a aquellos que no comulgan con sus postulaciones o actitudes.

Me duele mucho, señor presidente —lo digo con toda honestidad—, que este proyecto de ley sea tan similar en aspectos fundamentales a la llamada ley 18.247 producida por el gobierno de la dictadura militar del general Onganía, y que por uno de los artículos de este proyecto se deroga.

Creo no equivocarme al sostener que proyectos de esta índole adolecen de un excesivo centralismo, como se desprende de los artículos analizados por el señor senador de la Rúa, fundamentalmente los que llevan los números 17 y 23, entre otros. Sus previsibles consecuencias se ven asociadas a un pasado de divisionismo de la familia argentina que nadie quiere revivir y que estamos empeñados en enterrar definitivamente a fin de lograr el clima de concordia nacional que reclama la República para realizar en paz la tan ansiada revolución. Por nada en el mundo, señor presidente, debemos correr ese riesgo. Nadie tiene derecho, cualquiera fuera su intención, por muy generosa que ella sea, a poner en juego valores de convivencia alcanzados tras dura lucha por todos los sectores políticos del país en bien del futuro de la República.

Si no está en la intención de los autores del proyecto ni de nadie volver al pasado que nos dividió, debemos cuidar muy celosamente no solo que no se repita, sino que ni siquiera se confundan intenciones.

**Sr. Fonrouge.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Zarriello.** — Sí, señor senador.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor José Antonio Allende.

**Sr. Fonrouge.** — Lo descontaba por su amabilidad habitual.

Debo señalarle que por un artículo de esta legislación se deroga otra que había dictado Onganía. Encuentre aquí el señor senador la prueba de que es cierto que se están superando etapas odiosas y afirmando un sentimiento de concordia. Muchas gracias, señor senador.

**Sr. Zarriello.** — Pero en lo fundamental, he dicho, es que se repiten disposiciones de la llamada ley 18.247 del régimen militar.

No permitamos, señor presidente, que se nos pueda acusar de propiciar espectáculos de circo, como el que, junto con el pan, pretendió satisfacer las necesidades de vida del pueblo romano, substrayendo del pensamiento público la consideración de las grandes motivaciones que dan contenido a la vida de los pueblos y permiten la exaltación del espíritu humano.



Dijo el señor miembro informante en su exposición: «Todo en su medida y armoniosamente». Es por ello que en lo relativo a la filosofía de la acción no debemos confundir política de deportes con sometimiento del deportista. Son dos cosas total y absolutamente distintas. Ya nuestra vieja ley de educación común, número 1.420, establecía axiomáticamente que «la educación debe procurar el desarrollo armónico de las facultades físicas, mentales y espirituales del ser humano, integrando sus programas—dictados por las autoridades responsables—con la asignatura de educación física, tanto en el ciclo primario como en el ciclo preprimario».

El desarrollo de esta especialidad impulsó la creación del Instituto Nacional del Profesorado Superior de Educación Física, que tan brillantes especialistas ha dado al país, no sólo para la cátedra sino también para las instituciones deportivas de la más alta jerarquía nacional.

Me pregunto, señor presidente, si el esquema orgánico que prevé el proyecto de ley —y me atrevo a decirlo profusamente burocrático, costoso e impuesto por el centralismo agresivo que se proyecta— dará alguna vez iguales frutos que los logrados por las federaciones libres y comités olímpicos que llevaron nuestra enseña patria al podio de los vencedores en París, Amsterdam y Los Angeles, entre otros.

Podríamos no estar en contra de este proyecto de ley. Es más, antes he dicho que el país reclama una ley de deportes. Igualmente sostengo la necesidad de que dicha ley establezca y defina una política en la materia, pero deseo que no establezca un régimen compulsivo que esterilice esfuerzos, que desnaturalice la función de la labor colectiva, que comprometa sus resultados o que atente contra la libertad de asociarse con fines útiles, como recién lo expresaba el señor senador Brizuela y como está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional.

Mucho me agradaría ver a los más altos organismos responsables de la educación en todos los niveles, en mayor grado comprometidos en la estructura orgánica funcional del esquema del desarrollo del deporte. Se trata no tanto de lograr grandes deportistas sino de conseguir un país integrado con espíritu nacional, galvanizado por una determinada forma de vida que sostiene y defiende, que practica masiva e intensivamente el deporte como una forma de desarrollo de aptitudes de un pueblo sano y vigoroso, moral, intelectual y espiritualmente, en el que el deporte, en función de una definida política de integración formativa, faculte a todos los habitantes el logro de las metas que les permiten sus respectivas capacidades.

Por otra parte, me asiste la preocupación de que los recursos asignados por el artículo 12 del despacho de la comisión al «Fondo nacional del deporte», sean sobreabundantes, teniendo en cuenta que la sobreabundancia no asegura resultados.

Discrepo con el señor senador Díaz Bialek cuando decía que no desplaza otras áreas donde son necesarios los recursos, sobre todo si se consideran las tremendas necesidades de vivienda, de creación de fuentes de trabajo, de salud pública y de educación, que son características dramáticas que agobian la vida argentina en estos momentos.

El señor senador de la Rúa ha hecho un análisis exhaustivo del articulado de este despacho. Pero hay aspectos que preocupan seriamente. Aun sin entrar en el análisis pormenorizado del proyecto —que por otra parte no es mi propósito ya que las exposiciones de los señores miembros informantes han sido suficientemente claras y explícitas—, deseo señalar aquellos aspectos que, por imperio del error en la aplicación de la ley, debido a sus imprecisiones, como ya he señalado en este recinto, pueden dar resultados contrarios al deseo del legislador de interpretar cabalmente las necesidades y anhelos de nuestro pueblo. Es por ello que declaro mi desagrado por el inciso f) del artículo 1º, cuando crea en lo nacional una estructura de administración, coordinación y apoyo al deporte; y en lo privado habla de asegurar el asesoramiento y apoyo que le sea requerido, expresión que no aclara absolutamente nada. ¿Qué debemos entender cuando hablamos de deporte privado y qué se debe interpretar cuando se refiere a deporte estatal o público?

La misma objeción cabe para el inciso g) del artículo 5º, que dice: «Proceder en el supuesto previsto en el inciso anterior a la inhabilitación del beneficiario para obtener nuevos recursos por el término que se determine, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte».

Lo mismo diría del inciso h) y más aún del i), cuando expresa que este organismo va a «aprobar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte de acuerdo a las elaboraciones que eleve el Consejo Nacional del Deporte».

La tremenda imprecisión de sus enunciados permite la aplicación de cualquier tipo de política. Y téngase bien en cuenta que estoy enfatizando nada menos que en materia de recursos, pautas de selección, entrenamiento y desarrollo de competencias. No quiero que de manera alguna, por el hecho de representar al país en una contienda deportiva, se someta al deportista a la obligación de tener que dedicar los triunfos que logre a determinadas personalidades políticas del país.

En este aspecto, señor presidente, no diré que tengo autoridad, pero sí puedo aclarar en el Senado que soy consecuente con actitudes anteriores, por cuanto he tenido la preocupación intensa de protestar cuando importantes y destacados deportistas argentinos fueron separados de las competencias internas para la Olimpiada de Melbourne por el simple hecho de haber simpatizado con el gobierno derrocado en 1955. Y cuando esos deportistas que dedicaban sus triunfos fueron sancionados —entre ellos el ac-



tual presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Félix Galimi— protesté con toda energía, en octubre de 1958, cuando un gobierno surgido de la voluntad popular se oponía a aprobar un proyecto de resolución que presenté en mi carácter de diputado nacional, por el cual solicitaba al Poder Ejecutivo la remisión de las actuaciones instruidas por la comisión investigadora en la Confederación Argentina de Deportes, que determinaron la suspensión de representantes de los diversos deportes que se practican en el país.

En ese proyecto se declaraba que la Cámara de Diputados de la Nación vería con agrado que el Poder Ejecutivo realizara las gestiones pertinentes a fin de obtener de la Confederación Argentina de Deportes el levantamiento de sanciones disciplinarias aplicadas a diversos deportistas por la comisión investigadora designada por el gobierno provisional. No hacía nada más que cumplir con mi deber al defender a deportistas que, aun teniendo otra ideología política—que comparten los señores senadores de la mayoría—, habían prestigiado al país en contiendas internacionales.

Lo ha dicho mi compañero de sector y lo ratifico: nos sumamos fervorosamente a quienes reclaman para el país una ley del deporte y, en consecuencia, consideramos importante la sanción de un instrumento legal que coordine el desenvolvimiento del deporte en el país.

El país reclama —insisto— una ley del deporte. Pero sin duda reclama una norma que evidencie el mayor empeño en respetar lo que muchas generaciones de pioneros y esforzados defensores del desarrollo del deporte argentino, sin sueldos ni compensaciones, sin más retribución que la satisfacción del deber cumplido en bien de la comunidad, han realizado. Los resultados pueden advertirse en las innumerables obras de infraestructura deportiva que existen a lo largo y a lo ancho de la República, en la enorme cantidad de pequeños y medianos clubes deportivos y sociales, algunos reunidos en federaciones, uniones zonales de ligas deportivas costeadas por el esfuerzo personal, a veces a costa de ingentes sacrificios, y que han dado para el país glorias en el orden interno e internacional.

Por eso entendemos que una estructura jurídica centralista no creará grandes deportistas. No olvidamos, señor presidente, las páginas de gloria que en la historia del deporte nacional escribieron en su hora —surgiendo del seno de esos humildes clubes, federaciones y ligas deportivas, sin color político alguno, sin imposiciones de superorganismos, sin recursos cuantiosos y sin una organización burocrática—, quienes no dedicaban sus triunfos más que a la patria, tales como Rivas —campeón mundial de los 30 kilómetros en competencia de tiempos con Ibarra—, Rinaldo Gorno, Juan Carlos Zabala, Delfor Cabrera, estos dos últimos campeones olímpicos; Navarra y Carreras; nadadores y na-

dadoras extraordinarios como Zorrilla, Aberton-do, Ernestina Duarte, el primero campeón olímpico de 400 metros libres; remeros como Tranquillo, Capozzo y Demiddi, campeones mundiales; campeones de salto en largo como Brunetto y Bosetti; precursoras del atletismo femenino como las hermanas Rodríguez, Noemí Simonetto y otras; aviadoras deportivas como Carola Lorenzini y Myriam Steffor, o los futbolistas de Amsterdam de 1928 y de Montevideo en 1930; los campeones mundiales de clubes de fútbol como Racing Club, Estudiantes de la Plata e Independiente; la ejemplar hazaña de Luis Angel Firpo; los campeones olímpicos de boxeo en 1924 y 1928; los campeones de distintas especialidades deportivas, sudamericanos, panamericanos o mundiales, como resultado del esfuerzo mancomunado y solidario de entidades privadas, que sólo disponiendo en forma circunstancial del apoyo del Estado dieron para el país estos resultados de los que todos nos sentimos orgullosos. Eran entidades privadas, señor presidente, que no estaban regladas por ningún organismo del Estado.

Olvidamos también en este proyecto de ley algunas disposiciones que reglen el desenvolvimiento del boxeo profesional, deporte al cual es muy afecto el señor presidente de la República, y del que fue en otros tiempos asiduo concurrente para alentar a muchachos del boxeo profesional que competían con representantes extranjeros en el estadio de esta importante empresa que nos prestigia, que es el Luna Park, que dirige con gran idoneidad Tito Lecomte. Allí tuvimos grandes campeones mundiales que hicieron conocer a nuestro país, como Accavallo, Pascual Pérez, Nicolino Locche y últimamente este gran campeón que es Carlos Monzón.

He dado todos estos nombres, señor presidente, como una expresión de solidaridad, de recuerdo y homenaje a esos brillantes deportistas argentinos, en momentos en que el Senado de la Nación está discutiendo un nuevo ordenamiento jurídico que va a reglar el deporte argentino.

Señor presidente: el debate ha sido muy amplio; he querido participar en él, así, muy rápidamente, con el solo propósito de evidenciar el esfuerzo de clubes privados como generadores de importantes conquistas del deporte argentino.

No es posible mantener el estado actual de desarrollo que evidencia la estructura orgánica funcional del deporte argentino. Es necesaria una reestructuración, pero es importante vivir intensamente el nivel de sensibilidad social que me impone, diría yo, mi propia filosofía política.

Es por ello que declaro enfáticamente que la ley del deporte que debe dictar este Parlamento tiene que ser el instrumento legal adecuado para que no sólo algunos grupos sociales privilegiados puedan disfrutar de la práctica del deporte en el país y de las facultades de realización humana

y social que el deporte proporciona, sino que sea todo, entiéndase bien, todo el pueblo argentino el que disfrute, en las mejores condiciones, de sus mayores beneficios. Es por ello, señor presidente, que objeto la organización que por imperio de la ley se desea adoptar para la vida del deporte en la República.

El país no quiere un Estado dueño de todo. No quiere un Estado omnipotente y omnipresente en cada una de sus determinaciones. Desea realizarse en todos los campos de la formación en procura de la plenitud de desarrollo de sus particulares capacidades, pero reservándose la cuota de libertad en la que germina esplendoroso y da frutos magníficos el esfuerzo conjugado en un clima de libertad, de respeto y sin imposiciones odiosas.

El Estado, lejos de imponer, debe fomentar la libertad y la capacidad de hacer del esfuerzo privado en todo el país, para lograr los mejores frutos, con la autonomía necesaria para poner en acción los mejores empeños, tal cual se realiza en los países de señalados niveles de desarrollo del deporte.

Quiero terminar, señor presidente, diciendo dos palabras sobre una declaración formulada por el comité de la Capital Federal de la Unión Cívica Radical —que tengo el alto honor de presidir— en la campaña proselitista de la elección del 11 de marzo de 1973 y en la que hacíamos un análisis sobre la minoridad y, entre otras cosas, decíamos: es importante que el país difunda la práctica de deportes desde la niñez. De ahí debemos comenzar, señor presidente.

Nada más.

**Sr. Díaz Biale.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: las observaciones formuladas por el señor senador Zarriello son una reiteración de las que hiciera el señor senador de la Rúa, y por ello creo que están suficientemente aclaradas a través de los conceptos vertidos en mi informe y de la respuesta que di posteriormente.

Sin embargo, quiero quitarle al señor senador Zarriello una preocupación, ya que ha hecho referencia a que el deporte no puede ser un privilegio de ciertos grupos sociales. Para su tranquilidad lo remito al artículo 19, inciso e) del proyecto, en el que se habla de la «promoción de una conciencia nacional de los valores de la educación física y del deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los deportes de todos los habitantes del país y en especial de los niños y los jóvenes...».

Y el artículo 39, en el inciso a), señala lo siguiente: «Asegurar la adecuada formación y preparación física y el aprendizaje de los deportes en toda la población, con atención prioritaria en los padres, educadores, niños y jóvenes fo-

mentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas...».

Nada más, señor presidente.

**Sr. Zarriello.** — Precisamente, mi exposición en ese aspecto pretendía reafirmar la posición que en este momento está señalando el señor senador, y deseo fervientemente que ése sea el fin perseguido.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señor presidente: como miembro de la Comisión de Legislación General he suscrito, juntamente con el doctor de la Rúa, la disidencia en el despacho de la comisión con respecto a este proyecto del Poder Ejecutivo.

Evidentemente, los discursos de los doctores de la Rúa y Zarriello me evitarán que haga el análisis pormenorizado que había previsto de todo el articulado de esta ley y de este importante problema del deporte, cuya trascendencia ha señalado muy bien el señor senador Díaz Biale a través de las distintas etapas vividas en el desarrollo universal.

Quiero sí, señor presidente, señalar nuestra posición muy clara de plena defensa del deporte, del apoyo que él merece y de la importancia que le asignamos en la vida moderna como una contribución fundamental, junto con la educación física, en la orientación de las jóvenes generaciones. En este sentido el deporte ha desempeñado en todos los tiempos en la vida del país un papel trascendente. No ha nacido con ningún hombre ni con ningún partido.

La iniciativa privada en el país, el esfuerzo de los deportistas y dirigentes, ha posibilitado la creación de una gran conciencia deportiva que ha sido, es y será orgullo de los argentinos.

Reitero, señor presidente, que nosotros hemos apoyado a través del tiempo el deporte, al que le asignamos una importante función social, pues entendemos que se debe servir al deporte y no servirse de él.

No concebimos un Estado deportista, conduciendo, manejando, dirigiendo y sojuzgando las entidades deportivas del país.

Entendemos que el deporte debe merecer el apoyo y el fomento del Estado nacional, provincial y municipal, pero éstos jamás pueden regularlo, dominarlo o someterlo. Hemos señalado nuestras discrepancias, y celebro la suprema tenacidad que ha demostrado hoy el señor senador Díaz Biale al defender un proyecto que, en mi concepto, es indefendible. Pero su condición de jurista y, tal vez su espíritu, le han dado la fortaleza necesaria para ello.

Entiendo, señor presidente, que a este proyecto lo condena el propio mensaje del Poder Ejecutivo, sobre el cual no se ha hecho el hincapié pleno que debe hacerse.

Dice el mensaje: «Por ello, el Estado debe asumir la responsabilidad de orientar, promover, asistir, ordenar y fiscalizar la actividad deportiva».

Es decir, demuestra los fines de dominación que orientan a este proyecto que hemos impugnado, y sobre el cual señalamos las distintas oposiciones y discrepancias fundamentales que él nos merece.

Más adelante dice el mensaje que se crea el Consejo Nacional del Deporte, que abarcará todas las áreas de la vida nacional «...siendo su misión la de centralizar todo el deporte...».

Estos conceptos, señor presidente, ratifican las impugnaciones que han formulado los distintos sectores de la minoría y que reitero a este proyecto. Y continúa diciendo el mensaje más adelante: «El Consejo Nacional del Deporte será el ente encargado de mantener la concepción centralizada de la filosofía justicialista en el deporte...».

Quiere decir que el gobierno antepone una filosofía partidista en un problema que no tiene sino un fin de interés público y que no obedece ni puede obedecer a la filosofía de ningún sector determinado del país.

Además, señor presidente, quiero destacar que en mi concepto este proyecto es autoritario, es abusivo, es discrecional, es regresivo y, por último, no concilia con el estilo de una sociedad democrática.

Esta no es la ley del deporte que el país necesita. El país no necesita cualquier ley. El deporte merece todos los apoyos y todos los alicientes por parte de los poderes públicos, y entiendo que ésta no es una ley para la Nación Argentina ni para la sociedad de la democracia.

Con estas palabras, señor presidente, y renunciando al análisis del articulado, que aquí se ha hecho, dejo fundada nuestra actitud, de oposición y nuestras impugnaciones, que ratifican y reiteran los brillantes conceptos de nuestros representantes en este debate, y que no hacen sino responder a una norma invariable en la defensa de los idearios de civilización política y también de progreso colectivo que es de esencia de la democracia.

**Sr. Díaz Biale.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: con respecto a la referencia a la filosofía justicialista, hecha por el señor senador Perette luego de los generosos conceptos dirigidos a mi persona, me veo obligado a expresarle que aquélla es la filosofía de la mayoría del pueblo argentino. Nuestra filosofía es humanista y cristiana, de modo que ninguna preocupación puede existir de parte del señor senador.

Con respecto a ciertas críticas que el señor senador Perette formulara con su inteligencia y su reconocida habilidad, debo expresarle que la ley prevé la intervención de los padres y los maestros en la formación de la conciencia del deporte nacional, lo cual pone a esta iniciativa a salvo de los elementales peligros que el señor senador ha insinuado.

**Sr. Britos.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Compañero presidente: quiero recoger algunos conceptos que se han vertido con respecto a la intromisión del Estado en la actividad deportiva. Debo aclarar que ésta es una ley orientada a reorganizar el deporte. Si bien es cierto que el Estado no puede dictarla con precisión, también lo es que nos hemos encontrado con un deporte económicamente desorganizado, y que el Estado está obligado a llegar a las organizaciones deportivas con su aporte.

De acuerdo con lo que se ha dicho, pareciera que el Estado sirve para madre pero no para padre. Tenemos que entender que si el Estado es el recurso permanente de todas las organizaciones deportivas, después de siete años de dictadura los distintos organismos —federaciones o instituciones de otro nivel— que dirigen el deporte nacional han quedado en un estado económico calamitoso. Y si nosotros tenemos que llegar a la realización económica de todas las instituciones deportivas, ¿por qué no podemos participar con una ley como la que se discute, en la reorganización del deporte nacional? ¿O es que vamos a servir únicamente para solucionar los problemas del deporte en otro sentido?

Entiendo, compañero presidente, que se está equivocando el camino con algunos conceptos que se vierten, con respecto a lo que nuestro Poder Ejecutivo quiere en materia de deporte. Esto hay que aclararlo, porque de lo contrario el Estado va a aparecer como queriendo organizar un deporte exclusivamente para el movimiento nacional peronista.

Nosotros queremos, y lo ha demostrado nuestro compañero presidente en su gobierno anterior, no solamente con palabras sino con hechos, que la bandera argentina flamee en muchos lugares del mundo como lo hizo desde 1945 a 1955, en los distintos deportes. Esto es lo que no se ha mencionado aquí: que el Estado estuvo permanentemente al lado de aquellos hombres y mujeres que fueron valores destacados en aquellos años; además, nosotros hemos observado, de 1955 en adelante, que el Estado colaboró con nuestros valores en muy pocas oportunidades.

Eso es lo que quería aclarar, compañero presidente.

**Sr. Luder.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Luder.** — Quiero hacer una brevísima observación, ratificando y precisando lo que han dicho los señores senadores Díaz Biale y Britos con respecto a la alusión que ha hecho el señor senador Perette de que pensamos imponer la filosofía justicialista al deporte.

El mensaje que acompaña al proyecto de ley del Poder Ejecutivo dice que la promoción del deporte es una de las premisas de la doctrina

justicialista, lo que es muy distinto de imponer la doctrina justicialista al deporte.

Nada más.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — No quiero entrar en una polémica con mi distinguido colega el doctor Luder, pero yo he leído textualmente lo que dice el mensaje.

**Sr. Luder.** — Le pido que lo lea mejor.

**Sr. Perette.** — El mensaje dice en la parte pertinente que «el Consejo Nacional del Deporte, concebido por el acuerdo unánime de los Estados provinciales reunidos en el Primer Congreso Argentino del Deporte realizado en La Rioja, será el ente encargado de mantener la concepción centralizada de la filosofía justicialista en el deporte». Es decir que lo que yo he manifestado surge del propio mensaje, y agregó también que esa es la lápida que tiene como objeción inicial. En consecuencia, me he limitado a transcribir textualmente lo que acabo de mencionar.

**Sr. Luder.** — Recuerdo al señor senador Perette, porque el análisis de un mensaje debe hacerse tomando su contexto, que la primera parte del mensaje, cuando habla de la promoción del deporte, dice que ella es una de las premisas de la doctrina justicialista. Por lo tanto, el párrafo que se refiere al Consejo Nacional del Deporte debe integrarse con el que acabo de mencionar. Del mismo modo, cuando el radicalismo llegó al gobierno anunció permanentemente que cumplía con las premisas del programa radical.

Nosotros pretendemos afirmar con esta ley que cumplimos una premisa de nuestra doctrina justicialista, pero descarto toda posibilidad de que los señores senadores piensen que queremos imponer la filosofía justicialista a todo el deporte nacional.

**Sr. Perette.** — Celebro la interpretación que formula el señor senador Luder, pero el párrafo que he leído es concreto. Además, tiene sus antecedentes porque en todas las cuestiones se quiere incorporar como norma el contenido de la «filosofía justicialista», desde la reforma de la Constitución hasta el establecimiento de la quiniela, ya que según el decreto dictado una parte del producido de ésta se destina al fondo de «la cruzada de solidaridad justicialista». Del mismo modo, las fiestas del 24 y del 31 en el obelisco se han hecho bajo el lema de la «gran cruzada de solidaridad justicialista». Sostengo que no hay más cruzada que la de la Nación, no de un sector. Quiero señalar esto porque con la serie de hechos que se producen es lógica nuestra preocupación. He leído textualmente el artículo del decreto por el cual se dispone la creación de la quiniela, donde se habla en estos términos y creo personalmente que esto es un

gran perjuicio para el país, contrario a los principios de unidad nacional que todos ansiamos.

**Sr. Luder.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Luder.** — No quiero derivar este debate a la consideración de los programas de gobierno y a la forma en que este gobierno ejecuta su programa de acuerdo con el compromiso contraído con el pueblo. El proyecto de ley sobre quinielas se discutirá en su momento. Lo que he querido es aclarar el sentido del mensaje del Poder Ejecutivo y quitarle una preocupación a los señores senadores de las bancadas opositoras, aclarando que mediante este proyecto de ley no se pretende imponer la doctrina justicialista al deporte nacional, sino que se cumple con uno de los postulados de la doctrina justicialista.

**Sr. Perette.** — Acepto su interpretación.

**Sr. García** (A. A.). — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

**Sr. García** (A. A.). — Señor presidente: con frecuencia hemos oído al señor senador Perette y a miembros de la bancada radical, frente al tratamiento de diversos temas, hablar de la plataforma de su partido y leer puntos de la misma. Sin embargo no se me ha ocurrido en ningún momento pensar que el senador Perette, cuando habla de los programas de salud, quiere imponer en la sanidad argentina la doctrina del radicalismo, sino que hay un programa determinado que cada partido o coalición de partidos postula como hechos positivos para el país y los realiza de acuerdo a su manera de pensar y a su concepción de cómo deben ser efectuados. Esto no significa darle a la sanidad, por ejemplo, o al tema que en este caso abordamos, una concepción radical, justicialista o de otro tipo de bandería política; significa la realización de puntos que se especifican claramente en cada uno de los programas que se ofrecen al pueblo y que éste vota. Cuando el pueblo vota afirmativamente una plataforma de realizaciones, espera que sean hechas de acuerdo a esas concepciones y a ese pensamiento.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente** (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señor presidente: entiendo que el señor senador García, con toda habilidad, desvía este problema o lo quiere confundir. Cuando nosotros invocamos la plataforma de los partidos al tratar determinados temas que atañen a nuestro país, como lo ha hecho el doctor de la Rúa, por ejemplo, estamos dando postulaciones; se trata de reclamos, pero son reclamos de oposición; en cambio éstos son actos de gobierno, es decir, son decisiones que obligan al conjunto y a la totalidad...

**Sr. Luder.** — Si me permite el señor senador Perette...

Cuando estaban en el poder también invocaban la plataforma partidaria en sus actos de gobierno. Si no lo hubieran hecho habrían traicionado una misión.

**Sr. Perette.** — Si me permite la Presidencia, voy a contestar al señor senador Luder, porque nunca lo quiero dejar sin su correspondiente parte. (Risas.)

Hemos invocado en nuestra función de gobierno el cumplimiento del programa pero jamás en documento alguno hemos pretendido imponer al país una doctrina del radicalismo. En el caso que he citado sobre «quinielas» vemos que los fondos se asignan «a la Cruzada Justicialista», y los actos del 24 y 31 de diciembre en el obelisco fueron hechos bajo este lema, lo que constituye la negación de ese sentido de unidad nacional. Y vuelvo a repetir que las reclamaciones que formulan los partidos —y en esto coincido con el señor senador García— se hacen como una postulación que realizamos como fuerza opositora, pero éstos son actos de gobierno que yo creo que tienen que ir eliminándose; tengo la confianza —no la incredulidad— de que puedan superarse, y que así se hará, y estoy convencido de que el propio presidente de la República lo va a escuchar.

**Sr. García (A. A.).** — ¿Me permite una breve interrupción, señor senador?

**Sr. Perette.** — Sí, señor senador.

**Sr. García (A. A.).** — Solamente quería decirle que la interpretación que hace del letrero Cruzada de Solidaridad Justicialista no es la correcta, ya que no es lo mismo decir eso que Cruzada de Solidaridad para los Justicialistas. Cruzada de Solidaridad Justicialista tiene una clara interpretación; es la concepción justicialista puesta al servicio de todo el país sin distinciones...

**Sr. Perette.** — Es el mismo melón con distinto cuchillo, señor senador.

**Sr. Presidente (Allende).** — Le ruego al señor senador se sirva no dialogar.

**Sr. García (A. A.).** — En cambio si el lema hubiera sido Cruzada de Solidaridad para los Justicialistas sería completamente diferente.

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en particular.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 1º a 15.

—Se lee el artículo 16.

**Sr. de la Rúa.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: ha pasado ya un poco el fragor diría del reciente debate y yo me he reservado la oportunidad de volver a exponer con relación a este artículo, con el objeto de formular una proposición que pueda

mejorarlo, no obstante haberme abstenido de sugerir ninguna otra con respecto a los demás.

Debo aclarar que me siento complacido de que las objeciones que hemos formulado hayan suscitado réplicas que tienden a manifestar un espíritu de coincidencia, precisamente, con el de la filosofía que nosotros hemos expuesto. Lo lamentable hubiera sido que se negara el principio de libertad que debe regir el deporte y el derecho de todos a participar en las prácticas deportivas, o que se insistiera en que, efectivamente, tiene que haber un centralismo totalitario.

Afortunadamente, las exposiciones de los señores senadores de la mayoría tienden a aclarar que ése no es el espíritu que anima la ley. Nosotros hubiéramos querido que eso estuviera plasmado claramente en su letra.

Debo señalar el gran esfuerzo realizado por la Comisión de Legislación General, especialmente por la mayoría, y la importancia que tienen las claras y concisas palabras del señor miembro informante, como la tienen las expresadas por los señores senadores por San Luis y por Buenos Aires.

Objetamos la ley porque no encontramos en ella claramente reflejado ese espíritu, pero nos complace que sirva para interpretarla lo que aquí se ha dicho, en el sentido de que ella no ha de servir para desviaciones de ningún tipo, sino para que el deporte en el país sea apoyado por el Estado con este sentido amplio, generoso y democrático que debe observarse.

Por eso, al considerar este artículo 16, para que no queden dudas, señor presidente, y para que lo que se dice esté también escrito de algún modo, quiero solicitar a la comisión que acepte la inclusión en la parte que habla de las entidades deportivas de un párrafo del cual resulte el reconocimiento de su autonomía, que servirá para indicar que esta ley no significa el avasallamiento de las instituciones que hacen el deporte en el país, sino que reconoce sus méritos y sus actividades, y que lo que procura es apoyarlas. Por eso sugiero que se agregue a este artículo que «el Estado nacional reconoce la autonomía de las entidades deportivas existentes y a crearse» y que «la actividad de cada deporte en particular se regirá por sus estatutos y reglamentos específicos tanto nacionales como internacionales». Todo este segundo párrafo pertenece al proyecto del entonces diputado Alfonsín y refleja, a mi juicio, algo que es una realidad en el deporte: no es el Estado el que establece las reglas de competición en cada disciplina, sino que son las propias organizaciones las que las determinan.

Propongo este agregado y hago la observación solamente en este artículo porque pienso que a través de este breve añadido ayudaremos a que las ideas que han expuesto los miembros de la mayoría queden lealmente reconocidas y aceptadas, sin perjuicio de que nosotros mantengamos las demás objeciones que ya hemos formulado a la ley. Pero es que estamos convencidos de

que en el país todos queremos el desarrollo del deporte con un sentido de grandeza para afirmar el espíritu de paz y convivencia y los valores éticos que el deporte ayuda a imponer.

**Sr. Díaz Biale.** — Señor presidente: la comisión va a aceptar el agregado en su primera parte y lo hace porque es concordante con el espíritu y con el texto de la ley. Con la incorporación de este párrafo al texto propuesto por la comisión quedan desvirtuados —como implícitamente lo ha reconocido el señor senador de la Rúa— muchos o casi todos los argumentos y dudas que esta ley les había dejado.

En consecuencia, la comisión acepta el siguiente agregado: «el Estado nacional reconocerá la autonomía de las entidades deportivas existentes o a crearse».

La comisión no admite en cambio la segunda parte por cuanto estimo que resulta innecesaria.

**Sr. de la Rúa.** — Quisiera conocer los motivos por los cuales el señor miembro informante considera innecesaria la segunda parte del agregado propuesto.

**Sr. Díaz Biale.** — Lo considero así porque otras disposiciones de la ley establecen que la actividad de cada deporte será orientada por el Estado de acuerdo a las necesidades. Y éstas en cada caso son circunstanciales y no se pueden determinar.

**Sr. de la Rúa.** — ¿Eso significa que cada deporte se rige por sus reglamentos específicos y usted lo considera sobreentendido y por eso estima innecesario el agregado?

**Sr. Díaz Biale.** — Es una cuestión circunstancial que no puede ponerse en una norma general como es este proyecto de ley.

**Sr. Fonrouge.** — ¿Cómo queda el agregado?

**Sr. Díaz Biale.** — De la siguiente manera: «El Estado nacional reconocerá la autonomía de las entidades deportivas existentes o a crearse».

**Sr. Presidente (Allende).** — Con el agregado aceptado por la comisión, que expresa: «El Estado nacional reconocerá la autonomía de las entidades deportivas existentes o a crearse», se va a votar el artículo 16.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación, se votan y aprueban los artículos 17 a 19 del proyecto.

—Se lee el artículo 20.

**Sr. Losada.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Losada.** — Señor presidente: quisiera solicitar a la comisión un agregado en el artículo 20, que expresa que el órgano de aplicación podrá exigir a las instituciones deportivas, para ser beneficiarias de los recursos provistos por el «Fondo nacional del deporte», que ofrezcan en uso sus instalaciones a deportistas no pertenecientes a ellas. Yo sugiero a la comisión que además de establecer que deberán ofrecer sus

instalaciones a deportistas se añada que también deberán facilitarlas a las escuelas.

**Sr. Díaz Biale.** — La comisión no acepta la modificación.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consecuencia se va a votar el artículo 20 con el texto dictaminado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Sin observación se votan y aprueban los artículos 21 a 28 inclusive.

—El artículo 29 es de forma.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley (1). Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

### 3

#### CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES

**Sr. Presidente (Allende).** — Está reservado sobre la mesa el proyecto de ley en revisión sobre conflictos colectivos laborales.

**Sr. Luder.** — Pido la palabra.

Solicito el tratamiento sobre tablas de este asunto que se refiere a los conflictos colectivos laborales, proyecto de ley que fue en revisión a la Cámara de Diputados y volvió de ella con una reforma en su artículo 19, que no hace al fondo de la misma, sino a la necesidad de adecuar la redacción del texto a la época en que la Cámara de Diputados lo sancionó.

Es decir, esta ley había sido aprobada por este cuerpo a mediados del mes de diciembre y se estableció en su artículo 19 su prórroga, porque caducaba el 31 de diciembre. Como la Cámara de Diputados lo trató en la sesión de ayer modificó su redacción determinando que se restablece la vigencia del decreto ley 16.936. Se trata de una mera cuestión de forma respecto de la que entiendo que no es necesario abundar en consideraciones para destacar la conveniencia de no mantener un vacío legislativo y sancionar en esta misma sesión, sobre tablas, el proyecto venido de la Cámara de Diputados.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

Nuestro sector no tiene inconveniente en el tratamiento sobre tablas. Debe recordarse que cuando se trató este sistema del arbitraje obligatorio, nuestro bloque impugnó el proyecto de ley en su fondo y en su contenido, por cuanto afectaba principios, garantías y conquistas laborales y obreras que consideramos fundamentales. No es éste el momento de reeditar un debate sobre el problema de fondo ya que aquí se trata de una cuestión de fecha y que por ese solo motivo vuelve a esta Cámara.

En consecuencia, señor presidente, damos nuestra adhesión al tratamiento sobre tablas,

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.